

Análisis sobre las acciones de seguridad ciudadana en el departamento del Tolima para el periodo 2020 -2023.

Cesar Alejandro Ramírez Chaparro

Docente / Tutor

Zulibed Preciado Carrillo

Monografía para optar El título de Administrador Público

Escuela Superior de Administración Pública – ESAP Territorial Tolima

Facultad de Pregrado. Programa de Administración Pública Territorial

Ibagué, junio de 2024.

En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento al director de esta monografía, Dr. César Alejandro Ramírez Chaparro, por la dedicación y apoyo que brindó a este trabajo, por el respeto que mostró por mis sugerencias e ideas, y por la orientación y rigor que le dio. Gracias por confiar en mí desde que escribí esta monografía. Además, quiero agradecer su apoyo personal y humano a mis compañeros de administración pública territorial, con quienes he compartido proyectos y sueños a lo largo de estos años, así como a mi familia, que ha sido testigo de este proceso durante más de 5 años. me convenció para continuar cuando ya no tenía más fuerzas. Muchas gracias por tu amor infinito.



ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
BIBLIOTECA

FORMULARIO
DE AUTORIZACION DE PUBLICACION DE PROYECTOS Y TRABAJOS DE GRADO
EN FORMATO MAGNETICO

Fecha de entrega 2021-06-26
Año/ Mes/ Día

1. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS Y TRABAJO DE GRADO
(Marque con una X la que corresponda)

Pregrado Especialización Maestría Doctorado Otros

NOMBRE DEL ALUMNO:	Zulibed Prociado Camillo
DIRECCION:	Mz 2 Casa 2 B/ Jardín 5ª Avenida
TELEFONO:	322 923 9350
EMAIL:	Zulibedprociado@esap.edu.co
FACULTAD:	Administración Pública Territorial
PROGRAMA ACADÉMICO:	APT
TITULO QUE OPTA:	Administración Pública Territorial
ASESOR:	Cesar Alejandro Ramirez Chaparro

TITULO DE TRABAJO DE GRADO O PROYECTO:
Analisis sobre las acciones de Seguridad Ciudadana en el departamento del Tolima para el periodo 2020 - 2023

2. AUTORIZACION DE PUBLICACION DE VERSION ELECTRONICA DE PROYECTOS Y TRABAJOS
DE GRADO EN FORMATO MAGNETICO

Por medio de este escrito autorizo en forma gratuita y por tiempo indefinido a la Escuela Superior de Administración pública para situar en la Biblioteca en forma electrónica o divulgar por medio electrónico el texto del trabajo con el fin de ser consultado por el público en www.esap.edu.co

Toda persona que consulte ya sea en la Biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre las fuentes, es decir, el título del trabajo y el autor.

La Escuela Superior de Administración Pública no será responsable de ninguna reclamación que pudiera surgir de terceros que invoquen auditoría de la obra que presento.

Publicación electrónica

<input checked="" type="checkbox"/> Sí autorizo	<input type="checkbox"/> No autorizo	<input type="checkbox"/> Autorizo después de año
---	--------------------------------------	--

Firma(s) alumno(s) u otro(s)

Cédula No.

1110582018

Cédula No.

Contenido

Problemática	1
Planteamiento del problema	5
Objetivos.....	5
Objetivo General.....	5
Objetivos Específicos	5
Justificación	6
Marco Teórico	7
Seguridad humana	7
Justicia Social	10
Marco Conceptual.....	14
Seguridad Ciudadana	14
Convivencia Ciudadana	16
Articulación entre Seguridad Ciudadana y Convivencia Ciudadana.....	17
Marco Referencial	19
Contexto Internacional.....	20
Contexto Nacional	22
Contexto Local.....	24
Capítulo I	26
Capitulo II.....	35
Capitulo III.....	48
Conclusiones.....	51
Bibliografía.....	53

Índice de Tablas

Tabla 1 <i>Estrategias</i>	28
Tabla 2 <i>Programas</i>	31
Tabla 3 <i>Aspectos de políticas publicas</i>	50

Índice de Figura

Figura1 <i>Número y proporción de líderes víctimas de violencia durante la campaña electoral 2023</i>	2
Figura2 <i>Líderes víctimas de violencia 2023</i>	3
Figura3 <i>Estrategia integral de seguridad y convivencia</i>	27
Figura4 <i>Participación comunitaria</i>	31
Figura5 <i>Cumplimiento Programa 9</i>	37
Figura6 <i>Tasa de Homicidios</i>	38
Figura7 <i>Homicidios por sexo 2020-2023</i>	38
Figura8 <i>Homicidios por rango etario. 2020-2023.</i>	39
Figura9 <i>Centro de Mando Departamento de Policía Tolima-Picaleña, Ibagué</i>	40
Figura10 <i>Centro de mando Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad</i>	41
Figura11 <i>Nueva estación de Policía, Puerto Saldaña. Rioblanco Nueva Estación de Policía, Bilbao. Planadas.</i>	42
Figura12 <i>Nueva estación de Policía, Puerto Saldaña. Rioblanco Nueva Estación de Policía, Bilbao. Planadas.</i>	43
Figura13 <i>Entrega vehículo Subestación de Policía Llanitos – METIB</i>	44
Figura14 <i>Fortalecimiento de la línea 123</i>	45
Figura15 <i>Implementación de la escuela de derechos humanos y paz</i>	46
Figura16 <i>Proyectos innovadores de promoción, diálogo social y pedagogía para la paz</i>	48

Problemática

Tolima se enfrenta a los desafíos derivados de la expansión de su territorio por parte de algunos grupos armados ilegales, lo que agrega a esta situación es el tráfico de drogas, el reclutamiento de jóvenes y el aumento de la militarización. El departamento del Tolima también se enfrenta a problemas como el trabajo forzoso y las amenazas a la seguridad y la libertad de sus residentes, incluidos los pueblos indígenas, los agricultores, los líderes sociales y aquellos defensores de derechos humanos.

Un problema significativo es el uso de niños como de adolescentes por parte de aquellos grupos armados, un problema urgente que requiere atención inmediata. La situación general de seguridad se complica debido a los cambios en los patrones delictivos, lo que exige un enfoque dinámico y en evolución para garantizar la seguridad y la coexistencia. Los problemas de seguridad en el Tolima afectan a los niños, las juntas de acción comunitaria, las personas y los defensores de derechos humanos en proceso de reinserción. Estos grupos se enfrentan a riesgos como el reclutamiento por los distintos grupos armados ilegales, las amenazas a su seguridad personal y la restricción a su circulación y la violación de sus derechos humanos. La presencia de grupos armados ilegales, inmersos en el tráfico de drogas y actividades delictivas, afecta significativamente a la población local al aumentar el riesgo de violencia y explotación, especialmente entre los grupos sensibles, como los niños vulnerables y adolescentes que tienen un alto riesgo de ser reclutados.

Los líderes comunitarios y los defensores de los derechos humanos enfrentan riesgos particulares porque su trabajo para proteger los derechos y territorios de las comunidades a menudo los coloca en oposición directa a los intereses de estos grupos armados, lo que los convierte en blanco de amenazas y violencia. Vale aclarar que la Misión de Observación Electoral (MOE, 2023) lleva un registro permanente de todas las amenazas, secuestros, desapariciones, atentados y asesinatos en contra de candidatos, altos funcionarios de todos los niveles territoriales, líderes de organizaciones políticas, líderes sociales y miembros de juntas de acción comunal de todos los municipios del país.

La (MOE, 2023) registra 112 víctimas para el año 2023 en el departamento del Tolima, es decir que la violencia contra líderes políticos y sociales se disparó en época electoral. El último trimestre se registró una media de una víctima por día. A la (MOE, 2023) le preocupa el recrudecimiento de la violencia hacia líderes políticos, para quienes las agresiones letales incrementaron en comparación al informe presentado en enero 31 del 2022. A diferencia de reportes anteriores, donde el 50% de los incidentes fueron amenazas y otro 50% fueron agresiones mortales, en 2023 los homicidios y agresiones representaron el 65% de las agresiones en este grupo, el aumento anterior es del 22%.

Figura 1.

Número y proporción de líderes víctimas de violencia durante la campaña electoral 2023

Tipo de liderazgo		Tipo de hecho violento				Total de víctimas	% por tipo de liderazgo
		Amenaza	Desaparición	Atentado	Asesinato		
Político	Número de víctimas	15	1	16	14	46	41%
	% por tipo de hecho	33%	2%	35%	30%		
Social	Número de víctimas	11		4	26	41	36%
	% por tipo de hecho	27%	0%	10%	63%		
Comunal	Número de víctimas	3		2	20	25	23%
	% por tipo de hecho	12%	0%	8%	81%		
Total de víctimas	Total de víctimas	29	1	22	60	112	
	% por tipo de hecho	26%	1%	19%	54%	100%	

Nota: Fuente. Informe del Observatorio de Violencia Política y Social – MOE.2023.

El homicidio fue el hecho más frecuente en los últimos 12 meses en los distintos municipios del departamento del Tolima en el año 2023, con un total de 130 (43%) víctimas por diversas formas de violencia. Los integrantes de las JAC fueron los más preocupados por este tipo de agresiones, ya que representaron el 78% de los casos que los afectaron. En violencia social, el 53% de las víctimas son asesinadas. Sólo la violencia política no incluye el asesinato como principal acto de agresión, ya que las amenazas representan la mayor proporción de los actos violentos (57%). Si se suma el porcentaje de agresiones y asesinatos de este grupo, el resultado es 65 por ciento. La violencia contra líderes sociales sería del 73 por ciento en total, mientras que

la proporción de miembros de la JAC sería 15 puntos porcentuales mayor. Aunque el alcance de los asesinatos sigue siendo inversamente proporcional al nivel de representación, la proporción de líderes políticos que sufren esta aflicción ha aumentado de manera alarmante.

Figura2.
Líderes víctimas de violencia 2023

Cargo	Amenaza	Desaparición	Atentado	Asesinato	Total de hechos por cargo
Líder Social	11		4	26	41
Miembro de JAC	3		2	20	25
Líder Político	2	1	1	11	15
Funcionario de organismo de control	9			2	11
Alcalde Electo	1		4		5
Candidato Cámara	1		4		5
Ex Alcalde			3	1	4
Candidato Senado	1		1		2
Edil Electo			2		2
Funcionario Alcaldía			1		1
Secretaria de Educación	1				1
Total de hechos por tipo	29	1	22	60	112

Nota: Fuente. Informe del Observatorio de Violencia Política y Social – MOE.2023.

La (MOE, 2023) expresó su preocupación por estos niveles de violencia, especialmente contra ideologías extremas, que ilustran la amenaza de polarización e intolerancia política en la actual campaña electoral de 2023. En este caso, se trata del 41% de los actos concentrada en el país, a pesar de que las garantías de seguridad para la participación política son uno de los requisitos previos necesarios para la implementación exitosa del acuerdo de paz. Vale aclarar que de las 112 víctimas registradas desde el inicio de la campaña 2023, 17 son mujeres, lo que representa el 15% del total de víctimas. En la interpretación de las cifras anteriores hay que tener en cuenta que las mujeres están menos involucradas en política, ya que constituyen sólo una pequeña parte de los representantes electos, es normal que sufran en menor número.

Los niños, los adolescentes, los resguardos indígenas y los agricultores se enfrentan a riesgos como verse obligados a realizar actividades ilegales, amenazas a su seguridad personal y ser desplazados de sus hogares por la existencia de grupos armados ilegales. Los líderes comunitarios y los promotores de los derechos humanos corren el riesgo de sufrir violencia y amenazas por oponerse a las actividades ilegales y defender los derechos de las comunidades, lo que hace que su trabajo sea extremadamente peligroso. Toda la comunidad se ve influenciado por una mayor militarización de grupos ilegales y la estigmatización, lo que perturba su vida diaria y crea un ambiente de miedo e inseguridad.

Los líderes sociales corren el riesgo de ser violentados, pero sobre todo son las amenazas por parte de grupos armados ilegales cuando lideran promueven causas para el cumplimiento de los derechos de sus comunidades y se oponen a actividades ilegales como el tráfico de drogas. También corren el peligro de ser desplazados forzosamente de sus hogares, lo que perturba sus vidas y las de sus comunidades, debido a la expansión territorial de estos grupos armados. El trabajo de los líderes sociales los coloca en una posición vulnerable, lo que los convierte en blanco de estigmatización y ataques, ya que los grupos involucrados en actividades ilegales suelen considerarlos objetivo militar.

Según lo expuesto en el (Plan de Desarrollo el Tolima Nos Une, 2020-2023) los líderes sociales del Tolima corren peligro debido al rol desempeñado en pro de defender y promover los derechos humanos, y 33 líderes se enfrentan a un peligro inminente para sus vidas, incluidas las amenazas de quienes no están de acuerdo con su trabajo. Estos líderes, entre los que hay 4 mujeres y 29 hombres, suelen ser estigmatizados por su labor de promoción, lo que pone de manifiesto el desafío social a la hora de reconocer y proteger el valor de sus contribuciones. Los líderes sociales del Tolima son amenazados porque defienden los derechos humanos, lo que los pone en desacuerdo con quienes tal vez no quieren que se respeten estos derechos o están en contra de los cambios que estos líderes están intentando hacer. Con frecuencia se les estigmatiza por su trabajo, lo que significa que la gente puede verlos de manera negativa o considerarlos alborotadores porque defienden a la comunidad, lo que hace que sea peligroso para los grupos armados ilegalmente.

La presencia de delitos de alto impacto, como son el desplazamiento en contra de la voluntad de la persona, la violencia sexual y las amenazas, crea un entorno generalizado de miedo e

inseguridad, que repercute directamente en la tranquilidad mental y física de los tolimenses. Los grupos armados amenazan la seguridad de los líderes al aumentar el riesgo de violencia, incluidas las amenazas y los daños físicos, ya que los líderes suelen oponerse a los intereses de estos grupos al defender los derechos de las comunidades y oponerse a las actividades ilegales. Los líderes corren el riesgo de ser desplazados forzosamente de sus hogares, lo que perturba no solo sus vidas personales sino también su capacidad de liderar y proteger sus comunidades, ya que los grupos armados buscan ampliar su control e influencia. La presencia en el territorio Tolimense de los distintos grupos armados lleva a la estigmatización de los líderes y los califica de blancos para oponerse a actividades ilegales como el tráfico de drogas, lo que los aísla aún más y hace que su trabajo sea más complejo.

Planteamiento del problema

¿Qué acciones se han realizado en materia de seguridad ciudadana por la gobernación del Tolima en el periodo 2020 -2023 y cuáles son esos resultados alcanzados?

Objetivos

Objetivo General

Analizar las acciones en materia de seguridad ciudadana que realizó la gobernación del Tolima en el periodo 2020 -2023.

Objetivos Específicos

- ✓ Describir las acciones en materia de seguridad ciudadana que realizó la gobernación del Tolima en el periodo 2020 -2023.
- ✓ Identificar los resultados alcanzados en materia de seguridad ciudadana por la gobernación del Tolima en el periodo 2020 -2023.
- ✓ Proponer recomendaciones de política pública en materia de seguridad humana para el departamento del Tolima.

Justificación

El Tolima trabaja activamente para convertirse en un territorio caracterizado por la equidad, la paz y la defensa de derechos humanos, con un cuidado integral a las víctimas, lo que indica su compromiso de mejorar la seguridad y la armonía social. El hecho de que la región se centre en “Con seguridad el Tolima nos une” sugiere que se están realizando esfuerzos para mejorar la seguridad y fomentar un sentido de unidad entre sus habitantes. Al abordar los delitos de alto impacto y brindar apoyo a las víctimas, el Tolima busca mitigar el miedo y la inseguridad, contribuyendo a un entorno más seguro para sus ciudadanos.

La intención de la presente investigación es determinar cuáles acciones se han realizado en materia de seguridad ciudadana por la gobernación del Tolima para el periodo comprendido entre el año 2020 - 2023 y cuáles son esos resultados alcanzados. Esto es fundamental pues se busca que mediante las diferentes acciones identificadas se fortalezca la protección de la población, la seguridad permite proteger a los ciudadanos de amenazas como el crimen, la violencia, desastres naturales, etc. Esto es fundamental para garantizar el bienestar común y un alto nivel de calidad de vida en sus habitantes. Lo que conlleva a una estabilidad política y económica del departamento, un territorio seguro atrae inversiones, fomenta el desarrollo económico y genera confianza entre los pobladores y los industriales. La inestabilidad y la inseguridad pueden desalentar el crecimiento económico y el progreso.

Por consiguiente, esta investigación busca identificar las diferentes acciones y cuales fueron esos resultados que conlleven a la preservación de derechos y libertades, mediante las estrategias de seguridad que son necesarias para salvaguardar los derechos humanos, la libertad individual de los pobladores y un Estado social de derecho. Esto contribuye a crear una sociedad más justa y democrática. Cuando se trabaja en la prevención de conflictos y amenazas, el Tolima garantiza un enfoque sólido de seguridad que ayuda a prevenir y mitigar amenazas como el terrorismo, el crimen organizado, las tensiones fronterizas, etc. Esto mantiene la estabilidad y la paz en el departamento. Cuando se identifica acciones concretas en materia de seguridad ciudadana para el departamento del Tolima la confianza y cohesión social incrementa, cuando los tolimenses se

sienten seguros, hay más confianza en las instituciones públicas. Esto fortalece los lazos sociales y fomenta una mayor cohesión e integración en el territorio.

En resumen, la seguridad ciudadana es fundamental para garantizar el bienestar, la estabilidad, los derechos, la confianza y el desarrollo del departamento del Tolima. Es una responsabilidad clave de las autoridades y requiere un enfoque integral y estratégico.

Marco Teórico

El presente marco teórico se enfoca en la revisión y análisis de las distintas teorías, conceptos, perspectivas y estudios científicos coherentes con el objeto de estudio es decir la seguridad humana y justicia social, el propósito del marco teórico es suministrar un contexto armónico y fundamentado para la presente investigación, ayudando a situar el problema en cuestión dentro de un marco conceptual más amplio. Además, el presente marco teórico sirve para identificar las brechas en el conocimiento existente y demostrar la relevancia de la monografía. Es decir que a continuación se aborda el concepto desde la seguridad humana, en este orden de ideas se desarrollará el interrogante relacionado: ¿Cómo evoluciona el concepto de seguridad humana a lo largo del tiempo y qué factores influyen en su desarrollo? Profundizando en cuales son las tendencias y desafíos actuales en materia de seguridad humana y justicia social.

Seguridad humana

La seguridad humana se refiere a un enfoque que pone el énfasis en el cuidado, el desarrollo de la dignidad humana y el bienestar de las comunidades. Este concepto va más allá de la seguridad tradicional centrada en el estado-nación, abordando preocupaciones como la seguridad alimentaria, la salud pública, el entorno natural, los derechos humanos, la seguridad económica y la protección contra la violencia y el conflicto. En resumen, la seguridad humana busca garantizar las condiciones que permitan a las personas vivir vidas seguras, libres y dignas.

Para el autor (Ritu, 2022) el concepto de seguridad humana ha evolucionado considerablemente a lo largo del tiempo, pasando de un enfoque de seguridad tradicional centrado en el Estado a uno centrado en las personas, haciendo hincapié en el bienestar y el

desarrollo individual. Es de destacar que el documento Seguridad Humana: La Historia de Una Idea del autor (Ritu, 2022) examina el papel del derecho internacional en la seguridad humana y la práctica estatal, indica que la seguridad humana desafía el orden jurídico internacional basado en los estados, al presentar un enfoque multidimensional orientado al bienestar individual, esto quiere decir que ha influido en las políticas y el interés académico, impactando en áreas como la seguridad colectiva, los derechos humanos y el sostenimiento de la paz. Para (Ritu, 2022) la seguridad humana es crucial para abordar las desigualdades globales, los cambios tecnológicos y los desafíos del cambio climático, la seguridad humana hace hincapié en la importancia de preocuparse por los derechos humanos, la vulnerabilidad y la dignidad, y ofrece un marco para garantizar el bienestar de las poblaciones durante las pandemias y otras amenazas existenciales.

Así mismo la autora (Llairó, 2022) indica que los factores que influyen en esta evolución del concepto seguridad humana incluyen la redefinición de la seguridad para abarcar una gama más amplia de amenazas, como los conflictos, las pandemias, la pobreza y los desafíos ambientales, así como el cambio hacia la priorización del desarrollo humano y el bienestar en las relaciones internacionales. En su artículo titulado “Viejos y nuevos paradigmas de la seguridad humana”. Controversias y nuevos desafíos en el siglo XXI, la autora (Llairó, 2022) profundiza en el concepto de seguridad, este ha evolucionado para centrarse más en el desarrollo humano, lo que refleja el cambiante panorama mundial repleto de diversas amenazas, como la violencia, la pobreza y las pandemias. La seguridad humana ahora abarca una gama más amplia de cuestiones, lo que indica que se trata de un concepto complejo y dinámico que se adapta a los nuevos desafíos, incluidas las crisis de salud y la inestabilidad económica. Para (Llairó, 2022) definir la seguridad humana es un desafío debido a su naturaleza amplia y cambiante, lo que pone de relieve la necesidad de una adaptación continua para hacer frente a las amenazas multifacéticas a las que se enfrenta el mundo en la actualidad.

Al principio, la seguridad se centraba principalmente en proteger a un país de los ataques militares, pero con el tiempo, ha ido creciendo hasta incluir la protección y el bienestar de las comunidades, haciendo hincapié en la importancia del desarrollo humano y la protección contra diversas amenazas. Desde 1994, el programa de las (Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2010) ha desempeñado un papel clave en la transformación del concepto tradicional de seguridad para priorizar el desarrollo humano, mostrando un cambio hacia un enfoque más

centrado en las personas. En los últimos años, la definición de seguridad humana según (Llairó, 2022) se ha ampliado aún más para abordar nuevos desafíos, como las crisis de salud, las recesiones económicas y los desastres naturales, lo que refleja la naturaleza compleja y dinámica de las amenazas globales actuales.

Desde otra perspectiva el autor (Morazán, 2022) en este capítulo denominado seguridad humana, habla de cómo está cambiando el mundo, del rápido crecimiento de cosas como la tecnología y de cómo dependemos cada vez más los unos de los otros. Introduce una forma de pensar sobre la seguridad que se centra en proteger a las personas de los grandes problemas, como el cambio climático y las enfermedades. (Morazán, 2022) Explica que esta idea, denominada seguridad humana, es una buena manera de entender y abordar los grandes desafíos del siglo XXI, garantizando que las personas puedan vivir sin miedo, tener lo que necesitan y ser tratadas con respeto. La seguridad humana es crucial porque se centra en proteger a las personas de los desafíos modernos, como el cambio climático, las pandemias y el terrorismo, que son cada vez más comunes debido a la interconexión mundial y a los avances tecnológicos. Para (Morazán, 2022) ofrecer un enfoque integral al considerar varios aspectos de la seguridad, incluida la seguridad alimentaria, sanitaria y ambiental, es relevante para abordar la amplia gama de amenazas a las que se enfrentan las personas en el siglo XXI.

Al hacer insistencia en la importancia de estar libres del miedo y la miseria y del derecho a vivir con dignidad, la seguridad humana garantiza que los esfuerzos para proteger a las personas sean holísticos y aborden tanto los peligros inmediatos como las necesidades a largo plazo. Este concepto de seguridad humana ha ganado popularidad porque desplaza el enfoque de la seguridad estatal y militar hacia el cuidado de las personas y la población, alineándose con los esfuerzos mundiales que pretenden alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.

El concepto de seguridad evoluciona de las reacciones biológicas a los procesos mentales, influenciados por la ciencia y la tecnología. Los factores incluyen las percepciones subjetivas, la naturaleza interdisciplinaria y el análisis histórico en varios campos. Para (Aleksandr, 2019) en su artículo denominado: Cuestiones teóricas del concepto de "seguridad" indica que el concepto de seguridad ha pasado de ser una reacción biológica básica para la supervivencia a una idea compleja que implica la anticipación de las amenazas y la preservación de la vida, lo que refleja el crecimiento de la civilización humana y la actividad mental. (Aleksandr, 2019) propone que

esta evolución de la comprensión de la seguridad supuso un cambio significativo hacia una perspectiva científica durante los siglos XVI y XVII, influenciada por los avances de la ciencia y la tecnología, con filósofos como F. Bacon y B. Spinoza intentando formalizar el concepto. A pesar de estos esfuerzos, todavía no existe una definición académica de seguridad universalmente aceptada; las definiciones existentes son más empíricas y se basan en percepciones subjetivas en lugar de captar la esencia de la seguridad.

El avance histórico del concepto de seguridad muestra que se ha interpretado de diversas maneras, incluso como un medio para garantizar la tranquilidad del alma humana en la Edad Media, destacando su naturaleza interdisciplinaria y los desafíos que supone definirlo. Según (Aleksandr, 2019) inicialmente, la seguridad era un instinto básico destinado a protegerse de los peligros, y pasó de ser una simple reacción biológica a un complejo proceso de pensamiento que incluía anticipar las amenazas y proteger la vida a medida que se desarrollaban las actividades mentales humanas. Se reconoce que el concepto de seguridad es interdisciplinario, afecta a varias ramas de la ciencia y refleja su naturaleza compleja, que abarca diferentes campos de estudio, lo que indica su gran relevancia y el desafío de establecer una definición singular.

Justicia Social

La justicia social abarca brindar equidad a quienes se han enfrentado a la injusticia debido a diversos factores como la etnia, el género, la religión o la situación económica. Implica combatir los privilegios basados en la meritocracia con el humanismo y la compasión como base. Si bien históricamente los debates se centraron en la justicia distributiva, los movimientos recientes destacan formas más amplias de injusticia, como el sexismo, el racismo y la discapacidad. Filósofos como Platón y Aristóteles han contribuido a la evolución del concepto a lo largo de los siglos. Además, la filosofía de Vladimir Solovyov hace hincapié en la interdependencia de la justicia y la moralidad en la creación de una sociedad socialmente justa y moral. En general, la justicia social tiene como objetivo abordar la discriminación y las desigualdades a nivel social, promoviendo un compromiso proactivo para el cambio y poniendo fin a las injusticias.

En este orden de ideas para (Elsa, 2023) la justicia social consiste en brindar equidad a todas las personas que se han enfrentado a situaciones injustas debido a su origen, como su clase social, etnia, trabajo, género, riqueza, lugar de origen, religión, tradiciones, idioma o cuerpo. La

lucha para que todos tengan las mismas oportunidades en la vida y valora la amabilidad y el cuidado por los demás como sus principales creencias. El objetivo es concretar que la población cuente con las mismas oportunidades y facilitar las diferencias entre las personas como puntos fuertes en la construcción de sociedad.

Sin embargo, el enfoque actual de la justicia social a menudo según (Elsa, 2023) se centra en ganar las elecciones para unos pocos miembros de los grupos desfavorecidos y se limita a establecer cuotas de empleo en los entornos gubernamentales y educativos, que suelen ofrecer una educación deficiente. Existe un debate sobre la posibilidad de ampliar estas cuotas a las empresas privadas, pero se considera que este es el objetivo final, ya que simplifica la lucha más amplia y profunda por la justicia social.

La justicia social lucha por la equidad al tratar de brindar a todos, sin importar su origen o desafíos, proporcionen oportunidades de superación personal en la vida. Esto significa garantizar que las personas que han sido tratadas injustamente por su raza, trabajo, género o lugar de origen tengan las mismas oportunidades que todos los demás. Utiliza la idea de la bondad humana y el cuidado por los demás como base, y sugiere que tratar a las personas bien y con respeto es clave para garantizar que todos tengan las mismas oportunidades. El concepto también implica celebrar las diferencias de cada persona y considerarlas puntos fuertes, lo que ayuda a establecer una comunidad en la que se valore el origen único de cada persona y contribuye a que todos tengan una oportunidad justa.

Así mismo (Elsa, 2023) indica que el objetivo principal de la justicia social es garantizar que todos, sin importar su origen o los desafíos a los que se enfrenten, reciban un trato justo y tengan las mismas posibilidades de triunfar en la vida. Su objetivo es luchar contra los sistemas que favorecen a algunas personas sobre otras solo por el lugar de donde vienen o por su aspecto, promoviendo la amabilidad y el cuidado de todos. La justicia social busca crear una sociedad en la que las diferencias de todos se celebren como puntos fuertes, garantizando que la diversidad se considere un activo valioso para brindar a todos igualdad de oportunidades.

Por otro lado, el autor (Fontana, 2005) en su artículo denominado la justicia social destaca la importancia de la justicia como virtud social que guía a otras virtudes humanas hacia el bien común, haciendo hincapié en la igualdad y la promoción de los derechos humanos como elementos fundamentales de su definición. (Fontana, 2005) Explora el concepto de justicia

distributiva, haciendo hincapié en la necesidad de que los bienes y las responsabilidades no se compartan sobre la base de la igualdad sino de lo que se le debe proporcionalmente a cada individuo, abordando así las complejidades relacionadas con la equidad para la distribución de los bienes físicos. El documento analiza la base moral de los derechos y deberes, subrayando que el derecho a ejercer la libertad está limitado por leyes que garantizan el bienestar de todos, sentando así las bases para entender la justicia en el contexto de los derechos humanos y las obligaciones sociales. (Fontana, 2005) Ofrece una definición transformadora de la justicia social, fundada en el dogma de la dignidad inherente de cada persona y la responsabilidad colectiva de crear las condiciones para la realización de todos, proponiendo así un camino hacia el logro de la armonía social y la autorrealización individual.

La justicia social se describe según lo expuesto por (Fontana, 2005) como una virtud que alienta a las personas a crear condiciones de vida que permitan a cada individuo y grupo alcanzar su máximo potencial, enfatizando la importancia de trabajar juntos por el bien común. Es importante comprender que este concepto se define mediante principios como la dignidad de la persona, el bienestar común, la protección, la subsidiariedad, el propósito estándar de los bienes y el valor del trabajo de cada individuo, con el objetivo de guiar a las personas para que contribuyan a la realización de todos. Por último, el documento también explica que la justicia social implica compartir la riqueza y los recursos de manera justa, no basándose en la simple igualdad, sino en lo que cada persona necesita para vivir una vida plena.

Por otro lado, los autores (Murillo Torrecilla & Hernández Castilla, 2011) en su artículo denominado hacia un concepto de justicia social, exploran el complejo y multifacético concepto de justicia social, destacando su importancia histórica y los recientes movimientos globales que lo defienden, haciendo hincapié en la necesidad de un enfoque científico para comprender sus diversas interpretaciones e implicaciones. (Murillo Torrecilla & Hernández Castilla, 2011) profundizan en las tres principales concepciones contemporáneas de la justicia social: distribución, reconocimiento y participación, y explica cómo estos marcos pretenden abordar la marginación económica, el respeto cultural y la participación democrática en la sociedad.

Los autores (Murillo Torrecilla & Hernández Castilla, 2011) también analizan la importancia de considerar las capacidades individuales y las libertades reales por encima de la mera posesión de recursos, y propone que se pase de los medios tradicionales a las oportunidades reales para

que las personas vivan la vida que valoran. Por último, presentan la idea de la justicia social como un proyecto dinámico, que nunca se ha llevado a cabo del todo y que requiere una reflexión y una mejora continuas, y sugiere que la justicia debe verse como un verbo activo y no como un concepto estático.

La justicia social implica crear una comunidad social para que la repartición de los recursos sea equitativa y todas las personas tengan oportunidades y derechos equitativos, con el objetivo de minimizar la brecha entre los ricos y los necesitados. En este orden de ideas los autores (Murillo Torrecilla & Hernández Castilla, 2011) indican que parece un mundo en el que se reconocen y respetan las diferencias culturales, garantizando que todas las personas, independientemente de su origen, sean tratadas con dignidad y se reconozca su identidad cultural. La justicia social también significa que las personas puedan considerar distintas decisiones que intervienen directamente en la vida, promoviendo la participación en los procesos democráticos y garantizando que se escuche la voz de todos. Este concepto evoluciona con los sistemas económicos, con el objetivo de corregir las injusticias provocadas por el capitalismo, como la desigualdad económica, mediante el amparo de los derechos humanos y el bien común de la clase trabajadora.

Para (Murillo Torrecilla & Hernández Castilla, 2011) es importante el reconocimiento cultural en la justicia social esta garantiza que cada individuo se sienta respetado y valorado por su origen cultural único, lo que promueve un sentido de pertenencia y reduce la discriminación cultural. Es crucial porque reconoce las diversas historias, tradiciones y experiencias de las diferentes comunidades, lo cual es esencial para construir sociedades equitativas e inclusivas en las que todos tengan la oportunidad de participar plenamente. Por ende, el reconocer y valorar las diferencias culturales ayuda a combatir los estereotipos y los prejuicios, fomentando el respeto y la comprensión mutuos entre los diversos grupos, lo cual es un paso fundamental para lograr una verdadera justicia social.

Así que, la democracia destaca un papel decisivo en la justicia social al garantizar que cada individuo tenga la oportunidad de actuar en las decisiones que afectan directamente el desarrollo normal de la vida, promoviendo la equidad y la participación en la gobernanza social. Esto es fundamental para crear políticas que aborden la desigualdad y accedan a todos las personas de la sociedad que buscan lograr el bienestar.

En una sociedad democrática, los principios de la justicia social a menudo se aplican a través de leyes y políticas que tienen como objetivo reducir las disparidades y salvaguardar los derechos humanos de los grupos marginados, garantizando que todos tengan el mismo acceso a las oportunidades y los recursos.

Para finalizar la democracia fomenta una cultura de transparencia en cada proceso desarrollado en la gobernanza, que es esencial para abordar las injusticias sociales y garantizar que las necesidades de todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, se tengan en cuenta en los distintos procesos de elaboración y formulación de políticas públicas.

Marco Conceptual

Este marco conceptual proporciona una guía general para abordar los desafíos de seguridad ciudadana y conciencia ciudadana de una manera integral y efectiva. Es importante aclarar que este es adaptado al contexto local y a las necesidades específicas del departamento del Tolima. Este proporciona una estructura integral y coherente que guía el desarrollo, la implementación y la mejora de las iniciativas de seguridad en una comunidad. Ayuda a garantizar que los esfuerzos de seguridad ciudadana y convivencia ciudadana aborden de manera efectiva los desafíos multidimensionales y generen resultados sostenibles a largo plazo.

Seguridad Ciudadana

La seguridad pública abarca la protección de los intereses públicos vitales, incluida la salvaguardia de los derechos y libertades de los ciudadanos, y la prevención de amenazas socialmente peligrosas, como la delincuencia y las violaciones. Implica la capacidad de una sociedad para garantizar el bienestar de su población abordando las amenazas sanitarias emergentes, los desastres y los determinantes sociales de la salud. En el pensamiento político y legal de la antigua Grecia, la seguridad se consideraba un estado de relaciones sociales y un elemento valioso de la sociedad, con un enfoque en la armonía entre el universo, la sociedad y la humanidad. Los enfoques modernos de la seguridad pública enfatizan la necesidad de políticas

de seguridad pública integrales destinadas a reducir la delincuencia a través de medidas preventivas y hallazgos científicos, centrándose en las dimensiones objetivas y subjetivas de la seguridad. Al integrar diversas tecnologías y sistemas de información, los sistemas de mando y despacho visuales desempeñan un papel crucial a la hora de mejorar la seguridad pública al facilitar la gestión eficiente de los recursos y la respuesta a las emergencias.

Para el autor (Delgado, 2023) indica que la seguridad ciudadana se refiere a las medidas y políticas implementadas por las instituciones gubernamentales para mantener la paz, el orden público y prevenir la delincuencia en una comunidad. Este concepto ha evolucionado con el tiempo, y muchos países han adoptado enfoques más integrales desde la década de 1980, centrándose no solo en la aplicación de la ley sino también en medidas de seguridad social y operativa más amplias. Un aspecto clave de la seguridad ciudadana es la prevención del delito mediante la reducción de las oportunidades de actividades delictivas, lo que implica crear entornos más seguros y promover actividades que disuadan a las personas de participar en conductas delictivas. Las políticas eficaces de seguridad ciudadana también enfatizan la importancia de los programas de rehabilitación para los delincuentes, garantizando su reinserción en la sociedad y reduciendo la probabilidad de reincidencia.

Los enfoques integrales de la seguridad ciudadana según lo expresa (Delgado, 2023) se centran no solo en castigar el delito, sino también en prevenirlo abordando las causas fundamentales, como los factores sociales y económicos, que pueden ayudar a reducir las tasas de delincuencia de manera más eficaz. Al implementar medidas integrales, los gobiernos pueden crear entornos más seguros y promover actividades que disuadan el comportamiento delictivo, lo que ayuda a fomentar la confianza pública y la sensación de seguridad entre los ciudadanos. Estos enfoques hacen hincapié en los programas de rehabilitación para los delincuentes, garantizando su reinserción en la sociedad, lo que reduce la probabilidad de reincidencia y contribuye a la seguridad pública a largo plazo. Las estrategias integrales permiten el uso eficiente de los recursos públicos mediante la aplicación de los hallazgos científicos y la evaluación continua de la eficacia de las medidas de seguridad, garantizando que los esfuerzos sean efectivos y sostenibles.

Cuando se implementan medidas de seguridad integrales, las personas se sienten más seguras en sus comunidades, lo que aumenta su confianza en las instituciones públicas responsables de

mantener el orden y la seguridad. Los programas eficaces de prevención del delito y rehabilitación muestran que el gobierno se compromete no solo a castigar los delitos sino también a prevenirlos, lo que aumenta la confianza del público en las medidas gubernamentales. Al abordar las dimensiones objetivas y subjetivas de la seguridad, como las tasas reales de criminalidad y la percepción de seguridad de las personas, se fortalece la confianza pública, ya que los ciudadanos sienten menos miedo de convertirse en víctimas de delitos. Los enfoques integrales suelen implicar la participación de la comunidad en las iniciativas de seguridad, lo que fomenta el sentido de propiedad y colaboración entre los ciudadanos y las autoridades, lo que mejora aún más la confianza.

Convivencia Ciudadana

La convivencia ciudadana se refiere a la convivencia armoniosa de las personas dentro de una sociedad multicultural, enfatizando los valores de igualdad, participación y dignidad. Implica fomentar una relación dialógica que trascienda las dicotomías entre uno mismo y el otro y promueva la responsabilidad compartida por las interacciones pacíficas y éticas. El concepto de convivencia ciudadana según lo expresa el autor (Tourrián, 2006) tiene sus raíces en la idea de que los ciudadanos se reúnan en un espacio cívico específico para entablar interacciones respetuosas y de aceptación, reconociendo y abrazando la diversidad cultural. La educación en valores desempeña un papel crucial en la promoción de la convivencia ciudadana al inculcar responsabilidades compartidas y derivadas, haciendo hincapié en los componentes éticos de la cohabitación pacífica y el desarrollo socio moral. En general, la convivencia ciudadana encarna la noción de personas de diversos orígenes que viven juntas en armonía, respetan las diferencias de los demás y contribuyen a un bienestar colectivo basado en el respeto y la comprensión mutua.

La coexistencia ciudadana se refiere a la forma en que las personas viven juntas en una sociedad, haciendo hincapié en las interacciones pacíficas y el respeto mutuo entre personas de diversos orígenes culturales. Implica reconocer y aceptar las diferencias, promover los valores democráticos y garantizar que los derechos de todos se respeten y defiendan dentro de un espacio cívico compartido. Este concepto también incluye la responsabilidad compartida entre las familias, las escuelas, la sociedad civil y el estado de educar a las personas en valores que fomenten la convivencia pacífica y respetuosa. La educación para la convivencia ciudadana tiene

como objetivo desarrollar un comportamiento moral y ético, alentando a las personas a actuar de manera responsable y respetuosa con los demás miembros de su comunidad.

La coexistencia ciudadana según lo expresa (Tourrián, 2006) significa que las personas viven juntas en paz y respetan las diferencias de los demás, como los antecedentes culturales, dentro de un espacio comunitario compartido. Implica promover los valores democráticos, reconocer y aceptar la diversidad y garantizar que se respeten y defiendan los derechos de todos. La educación desempeña un papel clave en la convivencia ciudadana al enseñar valores que fomentan las interacciones pacíficas y respetuosas entre las personas. Esta educación es una responsabilidad compartida entre las familias, las escuelas, la sociedad civil y el estado, con el objetivo de desarrollar un comportamiento moral y ético en las personas. El objetivo es crear una comunidad en la que las personas actúen de manera responsable y respetuosa entre sí, fomentando un sentido de unidad y cooperación.

La educación ayuda a las personas a aprender a vivir juntas en paz enseñándoles a respetar y aceptar las diferentes culturas y orígenes, lo cual es esencial para una sociedad armoniosa. Las escuelas, las familias y la sociedad civil comparten la responsabilidad de enseñar valores que promuevan los principios democráticos y el respeto por la diversidad, garantizando que se respeten los derechos de todos. Al centrarse en el comportamiento moral y ético, la educación alienta a las personas a actuar de manera responsable y respetuosa con los demás, fomentando un sentido de unidad y cooperación dentro de la comunidad. El estado desempeña un papel crucial en el desarrollo de sistemas educativos que enfatizan estos valores, al tiempo que apoya los esfuerzos de las familias y la sociedad civil en esta responsabilidad compartida. La educación para la convivencia ciudadana implica crear experiencias de aprendizaje que ayuden a las personas a comprender y practicar la coexistencia pacífica, convirtiéndola en una parte clave del desarrollo cívico y la armonía social.

Articulación entre Seguridad Ciudadana y Convivencia Ciudadana

La articulación entre la seguridad ciudadana y la convivencia ciudadana es crucial para lograr resultados efectivos en materia de gobernanza y seguridad. Varios estudios según lo indica el autor (Ortiz, 2021) enfatizan la importancia de la participación ciudadana en las iniciativas de seguridad pública, destacando las formas de coproducción, como las acciones informativas,

políticas, económicas, sociales, preventivas y represivas. Sin embargo, persisten los desafíos a la hora de involucrar a los ciudadanos debido a los limitados canales de comunicación y la dinámica histórica dentro de las instituciones de seguridad pública. Los esfuerzos para mejorar esta articulación incluyen la implementación de programas como el Programa Nacional de Seguridad con Ciudadanía en Bogotá, con el objetivo de superar las prácticas represivas tradicionales y promover un enfoque de seguridad más inclusivo. En general, fomentar la colaboración y la cooperación entre las entidades estatales, los ciudadanos, el mundo académico y las organizaciones gubernamentales es esencial para construir un entorno más seguro y promover la participación ciudadana en los asuntos de seguridad pública

La seguridad pública es una preocupación importante, y el gobierno ha creado varios sistemas legales, regulatorios y administrativos para garantizar que los ciudadanos participen en la creación, el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas. A pesar de estos esfuerzos, según (Ortiz, 2021) los canales de comunicación y participación ciudadana han sido limitados debido a la dinámica de las instituciones de seguridad pública, que se centran principalmente en la gestión del delito en lugar de reducir el impacto delictivo. Para mejorar la seguridad ciudadana, es necesario repensar o fortalecer los canales de participación ciudadana, como los consejos comunales de planeación territorial, que pueden ayudar a reducir las tasas de delincuencia mediante una participación comunitaria más eficaz. La Secretaría de Seguridad del departamento del Tolima, de conformidad con la Ley, aborda la seguridad pública mediante una organización administrativa destinada a la prevención del delito y la lucha contra la delincuencia. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, como los plebiscitos, los referendos, las iniciativas populares y las consultas públicas, es esencial para reducir las tasas de criminalidad y resolver los problemas sociales, ya que están reconocidos por la Constitución y regulados por varias leyes.

La participación de la comunidad es crucial para la seguridad pública porque garantiza que los ciudadanos participen activamente en la creación, el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas, lo que ayuda a abordar sus preocupaciones y necesidades específicas de seguridad. La participación efectiva de la comunidad puede conducir a mejores canales de comunicación entre el público y las instituciones de seguridad, lo cual es esencial para reducir las tasas de delincuencia y mejorar la seguridad general de la comunidad. El

fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana, como los consejos territoriales de planeación, puede ayudar a desarrollar políticas públicas innovadoras que beneficien a toda la comunidad y contribuyan a la reducción de las actividades delictivas. El secretario de Seguridad del departamento del Tolima enfatiza la necesidad de la participación de la comunidad para mejorar la seguridad pública, ya que ayuda a prevenir el delito y promover la paz social a través de esfuerzos colectivos. Al involucrar a los ciudadanos en las iniciativas de seguridad pública, el gobierno puede mejorar la eficacia de las estrategias de prevención del delito y garantizar que las medidas adoptadas estén más alineadas con las necesidades y expectativas de la comunidad.

Marco Referencial

En el presente marco referencial se abordan una tesis doctoral, de la universidad de Barcelona, referente internacional, trabajo titulado “seguridad humana” del autor (Pereira, 2005) De igual manera se aborda un referente de carácter nacional del autor (Fernández, 2019) en su documento titulado “La implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP: un estudio comparado desde la experiencia internacional” que aporta conceptos sustanciales para el desarrollo de este trabajo de grado en relación al acuerdo de paz. Para finalizar, se aborda un referente de carácter regional o local, tesis de pregrado de la Pontificia Universidad Javeriana, de la facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la carrera Ciencia Política, en su trabajo titulado “Paz Territorial Y Capacidades Institucionales: Un Balance De La Implementación Del Acuerdo De Paz Con Énfasis En La Gestión De Recursos En El Municipio De Planadas, Tolima (2018-2022)” de la autora (Montaña, 2023). Este conjunto de conceptos teóricos, ideas y principios sirven como base para la realización de un para la investigación “Análisis sobre seguridad humana y justicia social, cuadro comparativo plan de desarrollo del municipio de san Luis Tolima 2020 – 2023 y el plan marco de implementación del acuerdo de paz (P.M.I.)” Este marco proporciona el contexto necesario para entender el problema o tema en cuestión, e incluye teorías, modelos, antecedentes históricos, leyes, normativas, entre otros elementos relevantes. El propósito del marco referencial es brindar una estructura sólida que oriente el desarrollo y la interpretación de esta investigación.

Contexto Internacional

El documento denominado “seguridad humana” del autor (Pereira, 2005) realiza aportes interesantes a la presente investigación en el contexto del concepto de seguridad humana, el cual se centra en las diversas necesidades y vulnerabilidades de las personas y las comunidades, y en cómo pueden abordarse mediante esfuerzos globales y locales. Por consiguiente, para la presente investigación es importante pues se busca analizar la operacionalización de las capacidades, destacando la importancia de la seguridad pública desde una mirada articulada que concibe el concepto de seguridad humana y el papel de los barrios del municipio de san Luis Tolima en la prevención de los delitos violentos. Para (Pereira, 2005) examina la posibilidad de cartografiar la inseguridad humana y sugiere un enfoque novedoso para comprender y abordar las causas fundamentales de la inseguridad, de igual manera critica la visión individualista de la naturaleza humana y la sociedad que prevalece en el pensamiento liberal, y aboga por una perspectiva más comunitaria que valore los lazos sociales y la cultura moral. La investigación enfatiza de (Pereira, 2005) la importancia de las comunidades locales para fomentar relaciones basadas en el respeto mutuo y los valores morales compartidos, que son esenciales para construir una buena sociedad.

El documento de (Pereira, 2005) hace hincapié en la importancia de la prevención temprana frente a la intervención posterior para garantizar la seguridad humana, destacando el papel de los derechos humanos en la prevención de conflictos y la promoción de relaciones sociales más armoniosas. Esto permite identificar la violencia, tanto política como delictiva, como una amenaza importante para la seguridad humana, y señala el impacto de dicha violencia en las tasas de mortalidad, junto con la amenaza que representan las enfermedades transmisibles.

El autor (Pereira, 2005) explora la idea de crear un mapa de la inseguridad humana y sugiere un enfoque innovador para comprender y abordar los diversos factores que contribuyen a la inseguridad. También analiza el papel de los acuerdos y principios internacionales, como la Declaración de Río y la (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 2010), en el apoyo a los derechos humanos y, por extensión, a la seguridad humana. Esto es importante pues el presente trabajo busca subrayar la importancia de los derechos financieros, generales y pedagógicos, así como la responsabilidad de acatar las normas de derechos humanos que son de talla internacional y bien reconocidos por distintos países.

La seguridad humana promueve la protección de las personas y las comunidades de todas las formas de violencia, ya sea de origen militar, civil o criminal, garantizando su seguridad y bienestar. Para (Pereira, 2005) va más allá del enfoque tradicional centrado en la seguridad del Estado para enfatizar la importancia de la protección y la seguridad de las propias personas, lo que sugiere un cambio de un enfoque centrado en el Estado a uno centrado en las personas. El concepto incluye una amplia gama de amenazas a la conservación, los medios de sostenimiento y la dignidad humana de las personas, con el objetivo de adoptar un enfoque integral para salvaguardar los derechos humanos y las libertades. Lo anteriormente descrito coincide perfectamente con el concepto que esta investigación pretende demostrar en su estudio de caso, más concretamente en san Luis Tolima donde la seguridad humana también implica la prevención temprana de los conflictos y la violencia, destacando el papel de los derechos humanos en el fomento de sociedades pacíficas y estables.

La seguridad humana es crucial porque se centra en proteger al ser humano de todas las formas de violencia, incluidas las militares, civiles y penales, garantizando su seguridad y bienestar, lo cual es esencial para una sociedad pacífica y estable. Según lo indica (Pereira, 2005) hace más hincapié en la prevención temprana que en la intervención posterior, destacando la importancia de abordar las causas fundamentales de los conflictos y la violencia antes de que se agraven, haciendo que las sociedades sean más seguras para todos. Al pasar de la seguridad nacional a la seguridad humana, la seguridad humana tiene como objetivo proteger la supervivencia, los medios de vida y la dignidad humanos y, por lo tanto, es un enfoque integral para garantizar la paz y el desarrollo humano en un territorio determinado. Por lo tanto, la seguridad humana también tiene un papel que desempeñar en el fortalecimiento del derecho internacional, especialmente en la prevención del genocidio y los crímenes de guerra y en la eliminación de las armas que causan daños excesivos a los civiles, protegiendo así los derechos humanos básicos. La seguridad humana según lo expone el autor (Pereira, 2005) es un concepto emergente que se centra más en las personas y las comunidades que en el Estado, y aborda una amplia gama de amenazas que van más allá de las preocupaciones tradicionales de seguridad estatal e incluyen aspectos como la seguridad económica, sanitaria y ambiental. El término “seguridad humana” ganó protagonismo en la década de 1990 y evolucionó hasta convertirse en un importante discurso académico y político que ratifica la protección de los derechos de cada persona y en proporcionarle los medios para valerse por sí mismas, más allá de

la mera protección contra la violencia. Los talleres y debates en los que participaron las principales instituciones y universidades mundiales han perfeccionado aún más las dimensiones de la seguridad humana, haciendo hincapié en su naturaleza multidimensional y en la importancia de un enfoque de base amplia que incluya la prevención de los conflictos y la violencia como elemento central para promover la seguridad y el desarrollo humanos. Esto es importante para la presente investigación, debido a que se busca abordar el concepto de seguridad humana a través del reconocimiento de los numerosos riesgos que afectan a las personas en diversos aspectos de la vida, y aboga por pasar de centrarse en los intereses del Estado a dar prioridad a la vida y la dignidad humanas, redefiniendo así la seguridad de una manera más centrada en la persona.

Contexto Nacional

Este documento del autor (Fernández, 2019) reconoce la complejidad de los escenarios posteriores a los acuerdos y las diferencias entre algunos casos, lo que dificulta los estudios comparativos, pero propone un análisis global de la implementación de los acuerdos mediante estudios longitudinales exhaustivos realizados por organizaciones acreditadas. (Fernández, 2019) revisa una amplia gama de literatura y estudios que exploran las implicaciones del acuerdo de paz en Colombia, sus antecedentes y su impacto en las necesidades políticas, sociales y económicas del país, así como en la justicia y la reconstrucción del tejido social. El artículo de (Fernández, 2019) analiza los aspectos socioeconómicos y políticos de la implementación de los acuerdos de paz y concluye que las disposiciones políticas, especialmente las reformas constitucionales, tienen una correlación potencial con el nivel de implementación, a pesar de la insignificancia estadística general de los modelos. También explora los esfuerzos para lograr un entorno de reconciliación y las barreras para la seguridad humana y la defensa en el contexto posterior al acuerdo, contribuyendo a la comprensión de las técnicas de afianzamiento de la paz.

El autor (Fernández, 2019) se centra en comprender la complejidad de la implementación de los acuerdos de paz, destacando los desafíos y las diferencias en varios casos sin ahondar en los detalles del progreso individual, sino más bien utilizando datos exhaustivos de estudios establecidos. Examina los factores predictivos de la implementación de los acuerdos de paz, analizando específicamente los factores socioeconómicos, políticos y relacionados con la seguridad, y evalúa su impacto en el éxito de estos acuerdos mediante un análisis estadístico.

(Fernández, 2019) examina los factores predictivos de la implementación de los acuerdos de paz, analizando específicamente los factores socioeconómicos, políticos y relacionados con la seguridad, y evalúa su impacto en el éxito de estos acuerdos mediante un análisis estadístico. Explorando las implicaciones más amplias del acuerdo de paz en Colombia, incluidos sus efectos en los escenarios políticos, sociales, culturales y económicos del territorio, así como el impacto en la justicia humana y la restauración del tejido social. Es de resaltar que uno de los principales desafíos de seguridad es el alto el fuego, que implica detener los combates y los ataques para crear un entorno pacífico, el desarmar a los excombatientes es crucial, ya que implica recolectar y controlar las armas para evitar futuros actos de violencia, también el proceso de desmovilización, que ayuda a los combatientes a volver a la vida civil, plantea dificultades a la hora de garantizar que no regresen al conflicto armado y por último, la reintegración de los excombatientes a la sociedad es un proceso complejo que exige crear oportunidades para que puedan vivir sin recurrir a la violencia.

Según (Fernández, 2019) la implementación del acuerdo de paz con las FARC-EP en Colombia se está comparando con otros casos internacionales para comprender sus avances y desafíos, utilizando modelos estadísticos para analizar varios aspectos de las disposiciones del acuerdo. El estudio destaca que, si bien algunas disposiciones del acuerdo de paz comienzan a implementarse inmediatamente después de la firma del acuerdo, esta implementación inicial suele ser mínima, lo que se alinea con las tendencias globales observadas en otros acuerdos de paz. Se están realizando esfuerzos para supervisar y verificar la implementación de los artículos del acuerdo de paz, especialmente en lo que respecta a las perspectivas de género y los avances generales, instituciones como el Instituto Kroc juega un papel crucial y definitivo a la hora de proporcionar datos y análisis. A pesar de los desafíos, se hace hincapié en comprender los avances y los obstáculos en la ejecución de los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz, lo cual es crucial para edificar una paz firme y duradera en Colombia.

Para finalizar es de destacar que, al reconocer la complejidad y los desafíos que plantea la comparación de escenarios posteriores a un acuerdo, debido a las importantes diferencias entre los casos, y hacer hincapié en un análisis integrado de la aplicación de las disposiciones generales dentro de las limitaciones del espacio disponible, sin ahondar en las características específicas del progreso de cada caso suministra información importante para el desarrollo de la

presente monografía. Es de destacar la importancia de que organizaciones acreditadas realicen estudios longitudinales y exhaustivos a fin de recopilar y utilizar la información con el propósito de lograr una comprensión integral del proceso de ejecución de los acuerdos de paz. El análisis por hecho por (Fernández, 2019) sugiere que la implementación del acuerdo de paz colombiano avanza, aunque lentamente, y que una parte importante de los compromisos aún no se ha iniciado o solo se ha aplicado mínimamente, lo que concuerda con las tendencias mundiales en la implementación de los acuerdos de paz. El documento subraya el papel de las acciones concretas para mejorar la vida de la población vulnerable entre ellos mujeres y población LGBTI en la transición hacia la paz, e indica que se hace hincapié en la inclusión en el proceso de paz.

Contexto Local

Para comenzar en autor (Montaña, 2023) proporciona un análisis detallado de las capacidades del Estado para implementar los acuerdos de paz, centrándose en las capacidades fiscales, militares y burocráticas para abordar los desafíos y apoyar las necesidades de la comunidad. Destaca los esfuerzos para mejorar la infraestructura y la tecnología educativas en las zonas rurales, y muestra la importancia de adaptar los entornos de aprendizaje a las condiciones locales y garantizar el acceso a la educación. La investigación describe la inversión en la reactivación económica y la producción agrícola, haciendo hincapié en la importancia del suministro de energía, los servicios de salud y la formalización de la tierra para el desarrollo rural. (Montaña, 2023) presenta un panorama completo de las iniciativas emprendidas en el marco de la política de paz con legalidad, incluidos los servicios gastronómicos comunitarios y los proyectos culturales, y demuestra un enfoque multifacético para mejorar la calidad de vida en las regiones afectadas.

La paz territorial es esencial para esta investigación ya que se centra en reconocer y abordar los desafíos y necesidades únicos de áreas específicas que se han visto fuertemente afectadas por el conflicto, con el objetivo de construir la paz teniendo en cuenta las particularidades económicas, culturales y sociales de san Luis Tolima para garantizar el desarrollo sostenible y la armonía, esto implica crear oportunidades de participación y cooperación dentro de las comunidades, reconocer las dinámicas históricas, económicas y sociales que han contribuido a la violencia y la desigualdad, y trabajar en pro de la transformación estructural para cerrar las brechas y fomentar la igualdad. El documento de (Montaña, 2023) tiene un enfoque basado en la

idea que la paz no se puede lograr mediante una estrategia única para todos, sino que requiere intervenciones personalizadas que respeten la diversidad y la autonomía de las comunidades afectadas y promuevan su participación activa en los procesos de consolidación de la paz.

El equilibrio entre la aplicación del acuerdo de paz y el desarrollo territorial pone de manifiesto el compromiso de ejecución para cumplir los objetivos del acuerdo de paz, centrándose en mejorar la calidad de vida en los sectores afectados por el conflicto buscan la construcción de mejores instituciones y el apoyo a las necesidades de la comunidad. Implica evaluar los avances en áreas como la reforma rural, la finalización del conflicto y la solución de los conflictos ocasionados por las drogas, y algunas áreas reciben más fondos y acciones que otras. El enfoque también incluye esfuerzos para mejorar la educación, las actividades económicas y la producción agrícola en estas regiones, con el objetivo de crear un entorno estable y pacífico. Una parte clave de este equilibrio es el enfoque de paz territorial, que analiza las necesidades específicas de las diferentes áreas para garantizar que el acuerdo de paz ayude a todos, concretamente a los de las regiones más conflictivas.

Para el autor (Montaña, 2023) expresa que uno de los principales desafíos es la lentitud de la aplicación, que podría extender el plazo previsto de finalización de 15 a 26 años, lo que pone de manifiesto problemas como la falta de financiación y el progreso limitado en áreas clave como los problemas de las drogas y la participación política. Otro problema es la dificultad para adaptar el enfoque del gobierno a las necesidades específicas de los territorios afectados, algo crucial para lograr la paz territorial, pero que ha supuesto desafíos en materia de coordinación y eficacia. Además, existe la preocupación por la distribución desigual de los recursos y la atención, ya que algunos aspectos, como la reforma rural, reciben más atención, potencialmente, a expensas de otras áreas críticas del acuerdo de paz. La implementación del acuerdo de paz también requiere desarrollar la capacidad institucional a nivel local, lo cual es un desafío debido a las limitaciones de recursos y experiencia en municipios como Planadas, que afectan a la capacidad de abordar las necesidades de infraestructura y servicios sociales.

Para finalizar el documento de (Montaña, 2023) destaca la lentitud de la implementación del acuerdo de paz y sugiere que podría tardar mucho más de lo esperado inicialmente debido a la falta de financiación y al progreso desigual en las diferentes áreas del acuerdo. Señala los desafíos que plantea el desarrollo de la capacidad institucional a nivel local, que es crucial para

la implementación efectiva del acuerdo de paz, especialmente en áreas como Planadas (Tolima), donde los recursos y la experiencia son limitados. (Montaña, 2023) también señala la importancia de adaptar los enfoques gubernamentales para satisfacer las necesidades únicas de los territorios afectados, haciendo hincapié en la necesidad de una mejor coordinación y eficacia para lograr la paz territorial. Por último, subraya la cuestión de la asignación de recursos e indica que algunos aspectos del acuerdo de paz, como la reforma rural, han recibido más atención y financiación a expensas de otras áreas críticas.

Capítulo I “Las acciones en materia de seguridad ciudadana que realizó la gobernación del Tolima en el periodo 2020 -2023”

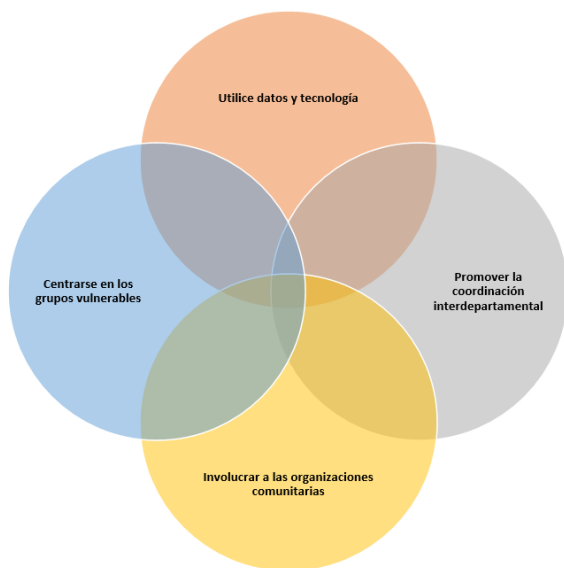
Tolima enfrenta importantes desafíos de seguridad, incluida la presencia de grupos armados ilegales y el tráfico de drogas, que contribuyen a la violencia y la inestabilidad en la región. La situación de seguridad en Tolima según lo expresa el informe de gestión del ministerio de defensa y la policía nacional implica la participación activa de los jóvenes, como lo demuestra la participación de 400 jóvenes en las actividades comunitarias y de seguridad organizadas por el gobierno local. La región ha implementado varias iniciativas de seguridad comunitaria, que incluyen esfuerzos coordinados con las autoridades locales para garantizar la seguridad y el bienestar de sus residentes. Tolima forma parte de operaciones estratégicas más amplias destinadas a mejorar la seguridad y reducir la delincuencia, lo que incluye la colaboración con las fuerzas de seguridad nacionales y la policía local para abordar amenazas y desafíos específicos. Se han asignado importantes recursos para mejorar las medidas de seguridad, incluido el despliegue de fuerzas policiales adicionales y el uso de tecnología avanzada para monitorear y responder a los incidentes de seguridad. Se presta especial atención a mejorar la seguridad en las zonas rurales, con actividades coordinadas destinadas a reducir los delitos de gran impacto y a garantizar una presencia policial eficaz y orientada a la comunidad.

La región del Tolima sufre varios problemas humanitarios, como el aumento de la militarización, la estigmatización de las poblaciones rurales y las amenazas a los derechos humanos básicos, como el derecho a la vida y la libertad de movimiento. Según lo expresa (Díaz,

2023) recomienda encarecidamente al gobierno del Tolima que lidere la creación de una estrategia regional integral de seguridad y coexistencia, que debe incluir evaluaciones detalladas de las amenazas a la seguridad y los impactos humanitarios. La estrategia debe incluir el uso de análisis de datos avanzados para crear mapas detallados y evaluaciones de riesgos, similares a las iniciativas exitosas en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Es necesario prestar especial atención a los grupos vulnerables, como los niños, los adolescentes, los pueblos indígenas y los líderes sociales, que corren un mayor riesgo debido a las actividades de los grupos armados.

El gobierno del Tolima debe liderar la creación de una estrategia integral de seguridad y convivencia, centrándose en comprender la situación de seguridad local, incluidos los actores involucrados, sus fuentes de ingresos y los impactos humanitarios. El Tolima en materia de seguridad lidera estrategias de seguridad que permite centrar los esfuerzos en la disminución de los delitos, entre ellas encontramos según lo expuesto a continuación en la figura 3:

Figura3.
Estrategia integral de seguridad y convivencia



Nota. Fuente: Plan estratégico institucional. Policía Nacional. 2023.

En este orden de ideas es de resaltar que, para el presente trabajo se aborda las estrategias realizadas por la gobernación del Tolima, tales como: Utilice datos y tecnología, Centrarse en los grupos vulnerables, Promover la coordinación interdepartamental e Involucrar a las

organizaciones comunitarias, a continuación, se describe las características de cada una de las estrategias según la tabla 1:

Tabla 1.
Estrategias

Estrategia	Característica
Utilice datos y tecnología	Implemente tecnología y análisis de datos avanzados para crear mapas detallados y evaluaciones de riesgos, similares a las iniciativas exitosas en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, a fin de comprender y abordar mejor las amenazas a la seguridad.
Centrarse en los grupos vulnerables	Se debe prestar especial atención a la protección de los grupos vulnerables, como los niños, los adolescentes, los pueblos indígenas y los líderes sociales, que corren un mayor riesgo debido a las actividades de los grupos armados.
Promover la coordinación interdepartamental	Fomentar los esfuerzos coordinados entre los diferentes departamentos y gobiernos locales para abordar los problemas de seguridad de manera integral, garantizando que las respuestas estén bien organizadas y sean eficaces.
Involucrar a las organizaciones comunitarias	Colabore estrechamente con las organizaciones comunitarias y los defensores de los derechos humanos para monitorear y responder a las amenazas a la seguridad, aprovechando sus conocimientos y redes locales para mejorar las medidas de seguridad.

Nota. Fuente: Policía Nacional. Estrategia Integral de Seguridad con Énfasis en Convivencia Ciudadana y Cambio Climático. 2023.

El objetivo principal de la prevención de accidentes es reducir el número de lesiones y muertes que se producen a causa de los accidentes, garantizando que las personas se mantengan seguras y sanas en sus actividades diarias. La prevención de accidentes tiene como objetivo crear entornos de trabajo más seguros mediante la identificación y la mitigación de los riesgos, lo que ayuda a reducir el número de accidentes y lesiones relacionados con el trabajo. Al implementar medidas de prevención de accidentes, se mejora la seguridad pública, lo que se traduce en menos accidentes en los espacios públicos y en las carreteras, lo que beneficia a la comunidad en su conjunto. La prevención de accidentes puede ahorrar importantes costos relacionados con los gastos médicos, la pérdida de productividad y los honorarios legales, lo que es beneficioso tanto para las personas como para las organizaciones. Las estrategias eficaces de prevención de accidentes pueden ayudar a fomentar la confianza entre la comunidad y las autoridades, ya que las personas se sienten más seguras y tienen más confianza en las medidas adoptadas para protegerlas.

La policía fomenta la confianza al interactuar con la comunidad a través de diversas actividades y eventos, como programas culturales y recreativos, que ayudan a mejorar las relaciones y demuestran que se preocupan por el bienestar de las personas a las que sirven. Al ser abierta y transparente en sus operaciones, como compartir actualizaciones e información a través de las redes sociales y los boletines de noticias internos, la policía puede fomentar un sentido de confianza y confiabilidad entre los miembros de la comunidad. Implementar nuevos diseños, imágenes e identidades para la fuerza policial y garantizar que estos cambios sean bien recibidos tanto por el personal interno como por el público ayuda a generar una percepción positiva y una confianza. Diseñar los servicios policiales para que sean más accesibles y estén más cerca de los ciudadanos, abordando sus preocupaciones sobre la seguridad y la protección, ayuda a construir una relación más sólida y basada en la confianza con la comunidad. Centrarse en la legitimidad y la confianza garantizando que las acciones policiales sean justas y justas y redunden en beneficio de la comunidad ayuda a fomentar la confianza y la cooperación a largo plazo.

Es necesario para la gobernación del Tolima abordar las necesidades locales, estas se abordan mediante la participación de la comunidad a través de varios programas y campañas, que ayudan a comprender sus preocupaciones y requisitos específicos, lo que conduce a soluciones más

eficaces. Los recursos como la financiación, el equipo y el apoyo logístico se asignan a las autoridades y unidades locales para garantizar que cuenten con las herramientas necesarias para abordar la seguridad y otros problemas locales de manera eficaz. Se invierten en el desarrollo y el mantenimiento de infraestructuras, como las instalaciones policiales y otras instalaciones, a fin de garantizar que las áreas locales cuenten con el apoyo necesario para la seguridad y la protección.

En las escuelas y otras instituciones se implementan programas para educar a la comunidad, especialmente a los niños y adolescentes, sobre la toma de decisiones seguras y responsables, lo que ayuda a abordar las necesidades locales relacionadas con la seguridad y la prevención. La legalización y la gestión adecuada de las propiedades y los recursos garantizan que las necesidades locales se satisfagan de manera eficiente, lo que permite una mejor planificación y ejecución de las medidas de seguridad. Otra estrategia liderada por la Gobernación del Tolima en materia de seguridad es la de participación ciudadana, esta implica incentivar a la comunidad del territorio para que se una en pro del cuidado de su entorno, realizando una red de apoyo.

Los programas para educar a la comunidad son muy importantes y beneficiosos en el ámbito de la seguridad humana. **Sensibilización y prevención:** Permiten informar y concientizar a la población sobre temas de seguridad, derechos humanos y resolución pacífica de conflictos. **Fomentan la prevención de violencia, delitos y riesgos a través de la educación.** **Fortalecimiento de la confianza:** Ayudan a construir una relación de confianza entre la comunidad y las autoridades. **Promueven la participación ciudadana y el empoderamiento de las personas.** **Desarrollo de habilidades:** Brindan capacitación a la comunidad en áreas como mediación de conflictos, primeros auxilios, respuesta a emergencias, entre otros. **Contribuyen al desarrollo de competencias y herramientas útiles para la seguridad comunitaria.** **Cohesión social:** Fomentan la integración y la cohesión social, al involucrar a diferentes grupos de la comunidad. **Promueven valores como la solidaridad, la tolerancia y el respeto a la diversidad.** **Sostenibilidad:** Permiten que la comunidad se apropie y se responsabilice de las acciones en materia de seguridad humana. **Garantizan la continuidad y el impacto a largo plazo de las iniciativas de seguridad.** En resumen, los programas de educación comunitaria son una herramienta valiosa para empoderar a la población, fortalecer la seguridad y promover la paz y la convivencia en las comunidades.

A continuación, se expone la participación comunitaria en seguridad, como estrategia liderada por la gobernación del Tolima, algunos aspectos se pueden evidenciar en la figura 4.

Figura4.
Participación comunitaria



Nota. Fuente: Plan estratégico institucional. Policía Nacional. 2023.

La participación comunitaria en seguridad es fundamental para crear entornos más seguros y resilientes. La participación comunitaria se refiere a los esfuerzos y acciones que realizan los miembros de una comunidad de manera conjunta con las autoridades competentes para mejorar la seguridad y prevenir el delito en su entorno. En resumen, la participación comunitaria en seguridad busca empoderar a los ciudadanos, fortalecer los vínculos sociales y trabajar de manera colaborativa con las autoridades para lograr entornos más seguros y resilientes. A continuación, se exponen algunos programas que lidera la gobernación del Tolima, en materia de participación ciudadana según la tabla 2.

Tabla 2.
Programas

Programa	Justificación
----------	---------------

Programas educativos	La policía lleva a cabo programas educativos como el «Diplomado de Caracterización Social e Intervención a Comunidades» para capacitar a los oficiales en la comprensión de los conflictos comunitarios y en la toma de mejores decisiones para conectarse con la comunidad.
Eventos comunitarios	Organizan varios eventos comunitarios, como actividades culturales, recreativas y deportivas, para mejorar el bienestar de los oficiales de policía y sus familias, fomentando un vínculo más fuerte con la comunidad.
Redes de apoyo	La policía crea redes de apoyo como la «red de apoyo con el gremio de hoteleros “COTELCO”, que involucra a los ciudadanos en las iniciativas de seguridad y garantiza la participación de la comunidad en las iniciativas de seguridad.
Diálogo y retroalimentación	A través de iniciativas como «Hablemos de Policía», la policía entabla diálogos con los miembros de la comunidad para recopilar comentarios y sugerencias para mejorar los servicios policiales y garantizar que las voces de la comunidad sean escuchadas y tenidas en cuenta.
Programas escolares	La implementación de programas como el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE) en las escuelas ayuda a abordar los problemas relacionados con la convivencia y la seguridad escolar,

involucrando directamente a los estudiantes y educadores en el proceso.

Nota. Fuente: Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Ministerio del Interior. 2024.

En este orden de ideas el programa educativo realizado por la policía capacita a los oficiales de policía para que comprendan mejor los conflictos comunitarios y tomen decisiones informadas para conectarse de manera más efectiva con la comunidad, mejorando las relaciones entre la policía y la comunidad. Este taller tiene como objetivo equipar a los líderes policiales con herramientas para administrar los servicios policiales centrados en la prevención y la participación de la comunidad, garantizando que puedan abordar las necesidades locales de manera eficiente. Organizado en cooperación con la policía sueca, este evento se centra en identificar las brechas y las iniciativas para fortalecer la educación policial, promoviendo un enfoque integral de la capacitación policial y la interacción comunitaria. La policía también lleva a cabo programas en las escuelas para educar a los niños y adolescentes sobre la toma de decisiones seguras y responsables, ayudando a prevenir problemas como el abuso de sustancias y promoviendo un entorno comunitario más seguro.

La policía lleva a cabo programas educativos como el “Diplomado de Caracterización Social e Intervención a Comunidades” para capacitar a los oficiales en la comprensión de los conflictos comunitarios y en la toma de mejores decisiones para conectarse con la comunidad. Organizan varios eventos comunitarios, como actividades culturales, recreativas y deportivas, para mejorar el bienestar de los oficiales de policía y sus familias y fomentar un vínculo más fuerte con la comunidad. La policía crea redes de apoyo como la “red de apoyo con el gremio de hoteleros COTELCO”, que involucra a los ciudadanos en las iniciativas de seguridad y garantiza la participación de la comunidad en las iniciativas de seguridad.

A través de iniciativas como “Hablemos de Policía”, la policía entabla diálogos con los miembros de la comunidad para recopilar comentarios y sugerencias para mejorar los servicios policiales y garantizar que las voces de la comunidad sean escuchadas y tenidas en cuenta. La implementación de programas como el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE) en las escuelas ayuda a abordar los problemas relacionados con la convivencia y la seguridad escolar, involucrando directamente a los estudiantes y educadores en el proceso.

Por otra parte, las estrategias de seguridad buscan promover los lazos comunitarios, la policía ofrece programas de capacitación, como el “Diplomado de Caracterización Social e Intervención a Comunidades”, para ayudar a los oficiales a comprender mejor los problemas de la comunidad y a tomar decisiones que fomenten relaciones más estrechas con los residentes. Organizan actividades culturales, recreativas y deportivas para interactuar con la comunidad, lo que beneficia a más de 220 000 personas y promueve el bienestar y el fortalecimiento de los lazos comunitarios. La policía crea redes de apoyo con organizaciones locales, como las asociaciones hoteleras, para involucrar a los ciudadanos en las iniciativas de seguridad y garantizar la participación de la comunidad en el mantenimiento de la seguridad.

Iniciativas como “Hablemos de Policía” permiten a la policía entablar conversaciones con los miembros de la comunidad, recopilar comentarios y sugerencias para mejorar los servicios y garantizar que se escuchen las voces de la comunidad. La implementación de programas en las escuelas ayuda a educar a los niños y adolescentes sobre la seguridad y el comportamiento responsable, involucrándolos directamente a ellos y a sus educadores en la creación de un entorno comunitario más seguro.

Es de resaltar que el propósito de las redes de apoyo es involucran a los ciudadanos en las iniciativas de seguridad, lo que ayuda a crear un entorno más seguro al fomentar la participación de la comunidad y la colaboración con la policía. Estas redes facilitan el intercambio de información importante entre la policía y la comunidad, lo que puede conducir a una mejor prevención del delito y a una respuesta más rápida ante los incidentes. Al trabajar en estrecha colaboración con los miembros de la comunidad, las redes de apoyo ayudan a fomentar la confianza y a mejorar las relaciones entre la policía y el público, lo que facilita la solución conjunta de los problemas locales.

Las redes de apoyo pueden movilizar recursos de la comunidad, como voluntarios y organizaciones locales, para ayudar en diversas actividades de seguridad y construcción de la comunidad. Proporcionan una plataforma para que los miembros de la comunidad envíen comentarios y sugerencias a la policía, garantizando que se escuchen y aborden las necesidades y preocupaciones de la comunidad.

Para la gobernación del Tolima las redes mejoran la seguridad, involucran a los ciudadanos en las iniciativas de seguridad, lo que ayuda a crear un entorno más seguro al fomentar la

participación de la comunidad y la colaboración con la policía. Estas redes facilitan el intercambio de información importante entre la policía y la comunidad, lo que permite una mejor prevención del delito y una respuesta más rápida a los incidentes. Al trabajar en estrecha colaboración con los miembros de la comunidad, las redes de apoyo ayudan a fomentar la confianza y mejorar las relaciones entre la policía y el público, lo que facilita la solución conjunta de los problemas locales.

Las redes de apoyo pueden movilizar recursos de la comunidad, como voluntarios y organizaciones locales, para ayudar en diversas actividades de seguridad y construcción de la comunidad. Proporcionan una plataforma para que los miembros de la comunidad envíen comentarios y sugerencias a la policía, garantizando que se escuchen y aborden las necesidades y preocupaciones de la comunidad.

Capítulo II “Los resultados alcanzados en materia de seguridad ciudadana por la gobernación del Tolima en el periodo 2020 -2023”

Para el desarrollo del presente capítulo, se aborda el plan de gestión relacionado al cumplimiento de las metas en el Plan de desarrollo “El Tolima nos une” 2020-2023, en el programa 9 *En el Tolima nace la paz*, este relacionado con el tema de seguridad ciudadana. Por consiguiente, se hace un análisis de los programas, las estrategias y las metas con el propósito de comprender el margen de gestión realizado por la gobernación del Tolima.

Para analizar los resultados alcanzados en materia de seguridad ciudadana, es importante considerar los siguientes aspectos clave: Indicadores de desempeño: Identificar y dar seguimiento a indicadores cuantitativos como tasas de delincuencia, violencia, percepción de seguridad, entre otros. Analizar la evolución de estos indicadores a lo largo del tiempo para evaluar tendencias y resultados. Satisfacción y percepción ciudadana: Realizar encuestas o sondeos a la población para conocer su percepción sobre la situación de seguridad en su comunidad. Evaluar la satisfacción con los servicios y acciones de las autoridades en materia de seguridad. Evaluación de programas y políticas: Analizar la implementación y el impacto de programas, proyectos y políticas públicas de seguridad ciudadana. Identificar los elementos que han funcionado o que han representado desafíos en su ejecución. Coordinación interinstitucional:

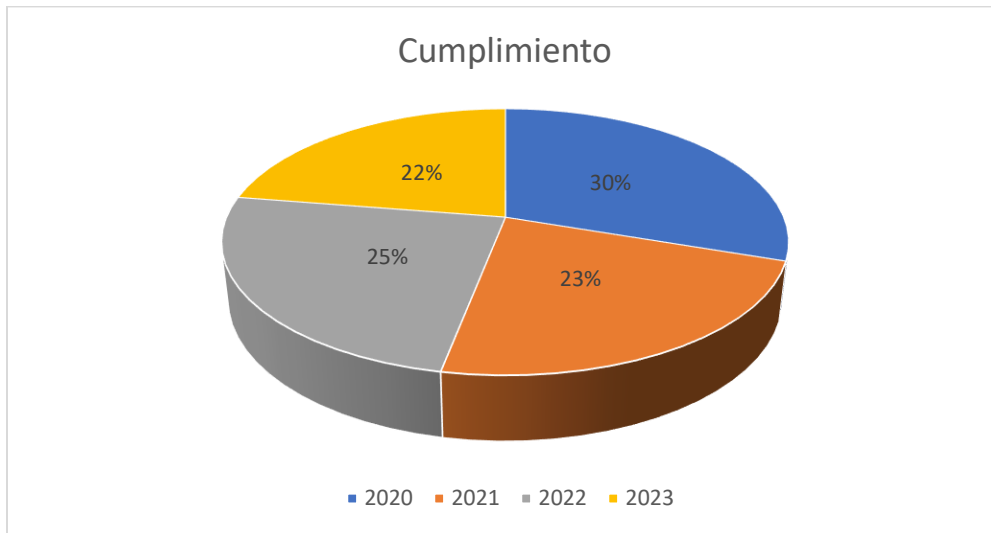
Examinar la capacidad de las instituciones de seguridad y justicia para trabajar de manera articulada y efectiva. Evaluar los mecanismos de cooperación, intercambio de información y toma de decisiones conjunta. Rendición de cuentas y transparencia: Analizar los procesos de control, auditoría y transparencia en el uso de recursos y la implementación de las políticas. Evaluar la disponibilidad y acceso a información pública sobre los resultados de las acciones en materia de seguridad ciudadana. Impacto en la vida de las personas: Valorar los efectos concretos que las acciones en seguridad ciudadana han tenido en la calidad de vida y el bienestar de la población. Identificar si se han logrado mejoras sostenibles en la convivencia, la cohesión social y el desarrollo comunitario.

Este análisis multidimensional permite tener una visión integral de los avances, retos y oportunidades de mejora en materia de seguridad ciudadana, para orientar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas más efectivas.

Programa 9: En el Tolima nace la paz (Plan de desarrollo departamental el Tolima nos une, 2020-2023)

El progreso material en este eje en 2020 será del 91,90%, en 2021 llegará al 69,46%, en 2022 llegará al 74,53% y al 2023 será del 68,33%, el acumulado de 4 años es del 80,53%. Ver la figura 5:

Figura5.
Cumplimiento Programa 9



Nota: Fuente. Plan de desarrollo departamental el Tolima nos une, 2020-2023.

En cuanto al avance financiero, el monto total de ejecución asciende a 46.252 millones de dólares, incluyendo recursos propios, recursos nacionales y el sistema de impuesto a los recursos comunes.

Para el Departamento del Tolima, la tasa inicial en 2020 (22 asesinatos por 100.000 habitantes) disminuyó a 19,2 x 100.000 en 2022, y la cifra inicial en 2023 fue de 10 * 100.000 habitantes (ver Figura 4), gracias a los avances tecnológicos. Proporcionar a las agencias de seguridad mayores componentes móviles para acelerar los tiempos de respuesta ante incidentes de violación del orden público. Base para evaluar la implementación del Plan de Acción Territorial - PAT; El 97% se logró a través de acciones integradas en los componentes de prevención, asistencia, atención, reparación integral, fortalecimiento institucional y participación efectiva de las víctimas del conflicto armado interno.

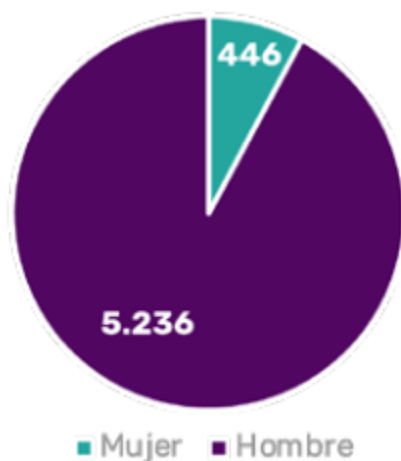
Estos tres componentes (Prevención, Asistencia, Atención de Conflictos) deben estar articulados de manera integral en las políticas públicas, de modo que se aborde la seguridad humana de forma holística, atendiendo a la prevención, la asistencia y la resolución efectiva de conflictos. Además, es crucial que estas políticas sean diseñadas e implementadas con la participación activa de la comunidad, para que reflejen sus necesidades y prioridades en materia de seguridad.

Figura6.
Tasa de Homicidios

Nota: Fuente. Plan de desarrollo departamental el Tolima nos une, 2020-2023.

La estrategia del gobierno es instalar 200 nuevas cámaras de vigilancia para mejorar el sistema integrado de alarma y seguridad del SIES.

Figura7.
Homicidios por sexo 2020-2023



Nota: Fuente. Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 2023.

Esto es importante si sabes que la violencia asesina contra las mujeres tiene lugar en un contexto privado, que los agresores provienen en su mayoría de sus círculos inmediatos y que las motivaciones están relacionadas con la violencia doméstica y el género. Según las características del Plan de desarrollo departamental el Tolima nos une 2020 a 2023, 98 de 256 feminicidios (46% del total) cayeron en estas dos categorías. Por otro lado, la tasa de homicidios entre hombres en estas categorías aumentó al 2% durante el mismo período. Por lo tanto, se puede concluir que un factor de riesgo para las mujeres es su entorno privado, lo que hace la situación aún más preocupante, ya que las manifestaciones en estos espacios muchas

veces son silenciadas e invisibilizadas debido a las amenazas físicas o psicológicas o al estigma asociado.

Este es un desafío complejo que requiere un esfuerzo sostenido y coordinado entre diferentes sectores y niveles de gobierno, junto con la participación activa de la comunidad. Es crucial abordar las raíces del problema y brindar oportunidades y apoyo a los jóvenes para prevenir y reducir los homicidios.

Figura8.

Homicidios por rango etario. 2020-2023.



Nota: Fuente. Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 2023.

Siguiendo con el análisis de las características de las víctimas, un análisis del rango de edad revela un patrón que ha sido consistente a lo largo de la historia reciente del Tolima: las principales víctimas son los jóvenes (de 14 a 28 años) junto con la población en general, 2892 casos, 51 casos. Así, la juventud es considerada un factor de riesgo para ser víctima de homicidio en el Tolima. Esta interpretación es consistente con la visión de la Secretaría de la Juventud, que sostiene que es erróneo considerar a los propios jóvenes como factores de riesgo, sino que son los jóvenes quienes se encuentran en esta situación, cuyos derechos básicos son vulnerados en este caso sus vidas están en riesgo.

En el área de la ciudad de Ibagué, ubicada en cada uno de los 13 municipios y en los establecimientos comerciales, residenciales e institucionales de la ciudad, se han instalado y operado 200 cámaras de vigilancia y se está ampliando y modernizando el

comando central bajo el Tolima. La policía es utilizada por todos los residentes que transitan por las vías y lugares estratégicos de la ciudad. La inversión asciende a unos 12,5 mil millones de dólares, de los cuales 10 mil millones de dólares son gestionados por el Ministerio del Interior.

En general, las cámaras pueden ser un componente útil de un sistema de seguridad más amplio, pero no son una solución única. Se deben considerar otros factores como la iluminación, los controles de acceso, la seguridad física, etc. La efectividad de las cámaras depende de cómo se implementen y operen dentro de un enfoque integral de seguridad.

Figura9.

Centro de Mando Departamento de Policía Tolima-Picalaña, Ibagué



Nota: Fuente. Publicidad entregada por la secretaria del Interior Departamental del Tolima. 2023.

Por otro lado, se analiza el suministro de 21 nuevas cámaras de vigilancia para mejorar el sistema integrado de seguridad y emergencias del SIES en el casco urbano de Planadas y el pueblo de Gaitana:

En la comuna de Planadas (sede) y vereda Gaitana, se instaló y puso en funcionamiento un sistema de videovigilancia compuesto por 21 cámaras de alta resolución y dos centros de mando, con un costo de 1.554 millones de dólares; De ellos se beneficiaron un total de 1.637 personas.

Es importante evaluar cuidadosamente aspectos positivos y aspectos negativos, estos pros y contras ayudan a considerar la implementación de las cámaras de vigilancia dentro de un enfoque integral de seguridad humana, que también incluya otras medidas preventivas y de atención a las necesidades de la comunidad. La participación ciudadana y la transparencia en la toma de

decisiones sobre el uso de estas tecnologías son fundamentales. Además, se deben establecer protocolos claros que garanticen el respeto a los derechos y libertades de las personas. En resumen, las cámaras de vigilancia pueden generar cierta percepción de tranquilidad, pero deben ser parte de un abordaje más amplio y equilibrado de la seguridad comunitaria. Es importante tener en cuenta que las cámaras de vigilancia deben ser parte de un enfoque integral de seguridad humana, que también incluya otras estrategias preventivas y de atención a las necesidades de la comunidad.

Figura10.
Centro de mando Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad



Nota: Fuente. Estaciones de Policía en Planadas (Bilbao), Rioblanco (Puerto Saldaña, Herrera), Chaparral (El Limón).2023.

Esta orden conceptual implica implementar la estrategia de reubicar las comisarías de Puerto Saldaña y Herrera en Río Blanco: dotar de mobiliario y reconstruir sistemas de iluminación para su regreso, al tiempo que gestiona refuerzos en 21 departamentos para Herrera. Jefatura de Policía (Rioblanco); y 12 para la comisaría de Bilbao (Planadas), gestionada por interdepartamentales, y la comisaría de Limón (Chaparral), que dispone de fondos para comprar mobiliario que afecta a la seguridad y convivencia de las personas en las ciudades, donde no hay efectivos. Organizaciones estatales.

Aspectos positivos de las comisarías: Representan la presencia del Estado y las instituciones de seguridad en las comunidades. Pueden facilitar el acceso de la población a los servicios y la atención policial. Pueden contribuir a la prevención del delito y la respuesta oportuna a

incidentes. Permiten recibir denuncias y realizar investigaciones preliminares de manera descentralizada.

Aspectos negativos de las comisarias: En algunos casos, pueden estar asociadas a problemas de abuso de autoridad, corrupción o violaciones a los derechos humanos. Pueden generar desconfianza y distanciamiento entre la comunidad y la policía si no cuentan con la legitimidad y el apoyo de la población. Su ubicación geográfica y distribución no siempre responde a las necesidades y riesgos específicos de cada localidad. Pueden enfocarse más en el control y la represión que en la prevención y la resolución pacífica de conflictos.

Figura 11.

Nueva estación de Policía, Puerto Saldaña. Rioblanco Nueva Estación de Policía, Bilbao. Planadas.



Nota: Fuente. Informe de gestión al Plan de desarrollo “El Tolima nos une” 2020-2023.

Es importante evaluar el desempeño y la calidad de las comisarías de manera contextualizada, considerando factores como la formación y el comportamiento de los agentes, los mecanismos de rendición de cuentas, y el grado de colaboración con la comunidad. Un modelo de comisarías efectivo debería basarse en un enfoque de seguridad humana, con énfasis en la prevención, la protección de derechos y la participación ciudadana. Esto requiere de reformas y mejoras continuas en los sistemas policiales. En resumen, las comisarías pueden tener aspectos positivos, pero también enfrentan desafíos que deben ser abordados para que se conviertan en instituciones confiables y legítimas al servicio de la comunidad.

Las estaciones de policía estratégicamente ubicadas pueden mantener una presencia visible y disuasoria en las comunidades, lo que ayuda a prevenir y responder de manera oportuna a incidentes de seguridad. Desde las estaciones de policía, los oficiales pueden movilizarse y desplazarse con rapidez para atender llamadas de emergencia y garantizar una respuesta eficaz ante situaciones de delito o violencia. Las estaciones de policía pueden servir como puntos de contacto y de enlace entre las fuerzas de seguridad y la comunidad, lo que facilita la confianza, la cooperación y el intercambio de información. Desde las estaciones, la policía puede recopilar y analizar información relevante sobre patrones delictivos, amenazas y problemas de seguridad en la zona, lo que permite un enfoque más estratégico. Las estaciones de policía pueden facilitar la coordinación y la cooperación entre diferentes agencias y niveles de gobierno involucrados en la seguridad ciudadana. Algunas estaciones de policía también pueden ofrecer servicios de prevención del delito, resolución de conflictos y asistencia a víctimas, fortaleciendo el vínculo con la comunidad.

Sin embargo, es importante destacar que el impacto de las estaciones de policía en la seguridad ciudadana depende de varios factores, como su ubicación, recursos, capacidades, relación con la comunidad y la implementación de estrategias integrales de seguridad. Es necesario un enfoque equilibrado que combine la presencia policial con otros elementos clave, como la prevención, la participación comunitaria y el abordaje de las causas subyacentes de la inseguridad.

Figura12.

Nueva estación de Policía, Puerto Saldaña. Rioblanco Nueva Estación de Policía, Bilbao. Planadas.



Nota: Fuente. Informe de gestión al Plan de desarrollo “El Tolima nos une” 2020-2023.

De igual forma, se considera el cumplimiento de la estrategia de seguridad en relación con la compra y entrega de camionetas Metib – Villa Restrepo Llanitos Juntas (Ibagué): para mejorar las operaciones, vigilancia y capacidad de respuesta ante estatuas de delitos en las instalaciones turísticas de cañón del Combeima.

Gracias a esta estación la policía nacional ha logrado identificar la participación de estructuras criminales en un total de 414 víctimas de homicidios colectivos, la mayoría de estas víctimas han perdido la vida a manos de Grupos Armados Organizados Residuales (GAOr), constituyendo el 33% del total (136 víctimas), seguidos por los Grupos Armados Organizados (GAO) con un 23% (93 víctimas) y los Grupos de Delincuencia Común Organizados (GDCO) con un 15% (64 víctimas). En el caso específico de los GAO, se ha documentado que el Clan del Golfo está vinculado al asesinato de 50 víctimas, el ELN a 33, Los Caparros a 8, y 2 Los Pelusos (EPL).

Figura13.

Entrega vehículo Subestación de Policía Llanitos – METIB



Nota: Fuente. Informe de gestión al Plan de desarrollo “El Tolima nos une” 2020-2023.

Por otra parte, en relación de acciones para el fortalecimiento de la seguridad del departamento del Tolima, encontramos el fortalecimiento de la Línea de Emergencia 123 de la Policía Nacional.

En 2016 y 2017 se reforzó la línea de emergencia 123 con personal del call center, mejorando la seguridad, la interacción y la atención a la ciudadanía, lo que propició un aumento en el número de denuncias por implicación en diversos tipos de conductas delictivas. En aumentar los arrestos y mejorar el alcance. Las tasas de quejas aumentaron aproximadamente

un 3% según los informes recibidos con éxito, lo que afectó directamente la capacidad de respuesta y despliegue de los departamentos de policía. La inversión asciende a 872 millones.

Sin embargo, es importante que esta línea de atención esté bien implementada, con personal capacitado, protocolos de actuación definidos y recursos suficientes para dar seguimiento a las denuncias. Solo de esta manera se podrá aprovechar todo el potencial de esta herramienta para fortalecer la seguridad en la comunidad.

Gracia a la estrategia vehicular la policía nacional del departamento del Tolima puede impulsar el esclarecimiento de las investigaciones de homicidios contra población rural, implementado la estrategia de proyectos de investigación. A través de esta estrategia, realizó en el año 2023 13 Proyectos que vinculan 340 hechos criminales con 290 víctimas, centrandose en la investigación de acciones perpetradas por 5 Organizaciones Criminales. Estos proyectos exhiben un avance investigativo significativo, alcanzando el 93.26% (830 de 890 víctimas), y se distribuyen en las siguientes etapas procesales: 26 afectaciones con orden de captura, 133 afectaciones en etapa de investigación, 171 afectaciones en etapa de juicio, 28 afectaciones en etapa de preclusión por muerte del indiciado, y 172 afectaciones en etapa de ejecución de penas. De las 290 afectaciones con avance investigativo hacia el esclarecimiento, la relación de responsables por Organización Criminal es la siguiente: Disidencias Farc con 106 afectaciones, correspondiente al 65.84%; AGC o Clan del Golfo con 60 afectaciones, representando el 13.70%; ELN con 54 afectaciones, equivalente al 6.06%; EPL con 38 afectaciones, abarcando el 4.26%; y Caparros con 30 afectaciones, correspondiente al 3.37%.

Figura14.

Fortalecimiento de la línea 123



Nota: Fuente. Informe de gestión al Plan de desarrollo “El Tolima nos une” 2020-2023.

En el análisis del cumplimiento y la puesta en marcha de las distintas acciones en materia de seguridad para el departamento del Tolima, se destaca la implementación de la escuela de derechos humanos y paz.

Cuarenta y siete (47) líderes cívicos y comunitarios recibieron capacitación teórica y práctica en las áreas de compromiso cívico y control social, memoria histórica y reconciliación, diversidad y diversidad, al mismo tiempo que realizaron actividades transformadoras como: “Campaña de sensibilización: Mujeres amarse a sí mismo "Valórate, ámate y di no a los insultos. - Festival de cine en el Parque Anaime al Derecho. - “Encuentro con Mujeres Víctimas Tejiendo Memorias” en colaboración con el Programa de Derechos Humanos de USAID y la Universidad del Tolima; consolidando así la primera escuela de derechos humanos, diversidad y paz en el municipio Cajamarca.

Figura15.

Implementación de la escuela de derechos humanos y paz



Nota: Fuente. Secretaria de interior 2023.

Para finalizar se analiza la implementación de proyectos innovadores de promoción, diálogo social y pedagogía para la paz.

En consulta con las ciudades de Río Blanco y San Antonio, cincuenta (50) cascos azules fueron capacitados en promoción, innovación y convivencia, beneficiando a 240 familias del proyecto en cada zona urbana para contribuir a mejorar su calidad de vida y seguridad alimentaria. Se han realizado las siguientes inversiones:

- Contrato No. 0704 de fecha 28 de marzo de 2017 entre el Ayuntamiento de Rioblanco y el Departamento del Tolima por la cantidad de 288 millones de USD.

- Acuerdo No. 0827 de fecha 5 de mayo de 2017 entre el Ayuntamiento de San Antonio y el Departamento del Tolima por \$315 millones.

Desde el 13 de febrero de 2023, se da prioridad y fortalecimiento de la investigación de las afectaciones contra defensores de derechos humanos y/o líderes sociales. Para lograrlo, se ha implementado diversas estrategias, como la disposición de equipos especializados, la creación de mesas de articulación regionales y la implementación de la metodología de asociación de casos para identificar a las organizaciones criminales responsables. Todos estos esfuerzos se reflejan en los resultados sobresalientes obtenidos durante estos cuatro años de gestión en la gobernación del Tolima. Es relevante destacar que, durante el período comprendido entre 2016 y el inicio de la administración departamental del Tolima en el año 2020, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos – OACNUDH informó de 371 afectaciones a defensores de derechos humanos y líderes sociales. Este número aumentó a 417 víctimas para enero de 2021, momento en el cual Naciones Unidas dejó de reportar, y la Defensoría del Pueblo asumió la documentación de estas afectaciones. Desde entonces, la Defensoría ha registrado 494 homicidios adicionales de defensores de derechos humanos, lo que suma un total de 910 afectaciones entre lo reportado por Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo. En cuanto al progreso, se logró una tasa de avance de 475. Particulares Reincorporado FARC y Familiares, Defensores de Derechos Humanos, Fuerzas Armadas y Fuerza Pública, funcionarios Públicos, 13 esclarecimiento del 74,34% (310 de 417 víctimas) de las afectaciones documentadas por Naciones Unidas, superando en 21,78 puntos porcentuales la cifra recibida en 2020 (52,56%, es decir, 195 de 371 víctimas). Por otro lado, de las 494 víctimas reportadas por la Defensoría del Pueblo, se alcanzó una tasa de avance del 49,60% (245 de 494 víctimas). En conjunto, de las 910 víctimas documentadas por ambas entidades, la tasa de avance se sitúa en el 60,88% (554 de 910 víctimas).

Figura16.

Proyectos innovadores de promoción, diálogo social y pedagogía para la paz



Nota: Fuente. Secretaria de interior 2023.

El discurso de la paz debe cobrar vida, debe convertirse en una historia que florezca y arraigue en el pueblo. La paz territorial debe crear efectivamente territorios pacíficos inclusivos, participativos y una mejor distribución del poder local, y esto sólo es posible si existen centros de poder locales capaces de movilizar ideas y garantizar la inclusión y la participación democrática, estos centros de poder, intenta construir sobre la comprensión de la sociedad. Una pedagogía de paz debe proporcionar elementos conceptuales para la realización y el respeto de los derechos civiles, ya que las comunidades, organizaciones y líderes en muchos casos enfrentan cientos de rechazos, tanto legales como violentos, por parte de las instituciones estatales y al margen de la ley.

Capítulo III “Recomendaciones de política pública en materia de seguridad humana para el departamento del Tolima”

Para el presente trabajo es de aclarar que las políticas públicas en materia de seguridad humana son muy importantes. Algunos aspectos clave son la protección de los derechos humanos: Las políticas deben garantizar la protección de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal. Por otro lado, deben abordar la prevención de conflictos y resolución pacífica de disputas: Las políticas deben promover mecanismos para prevenir y resolver pacíficamente los conflictos, reduciendo así el riesgo de violencia. De igual manera se debe articular el acceso a servicios básicos: Políticas que aseguren

el acceso a servicios básicos como salud, educación, agua y saneamiento, contribuyen a mejorar las condiciones de vida y la seguridad de las personas. En este orden de ideas la seguridad ciudadana: Políticas orientadas a la prevención del crimen, la violencia y la delincuencia, así como a la mejora de la percepción de seguridad de la ciudadanía. En resumen, las políticas públicas en materia de seguridad humana son fundamentales para garantizar el bienestar y la protección de las personas, en un enfoque integral que abarca diversos aspectos de la vida.

A continuación, se exponen algunos elementos que deben llevar todas las políticas públicas en materia de seguridad, recalando que el departamento del Tolima tiene sectores de alerta roja en materia de grupos armados que buscan reagruparse y continuar delinquiendo. Los aspectos señalados a tener en cuenta son:

Enfoque multidimensional: Dado el contexto de posconflicto en Colombia, es fundamental que las políticas públicas de seguridad se aborden desde una perspectiva multidimensional. Esto implica considerar no solo aspectos estadísticos de crimen y presencia policial, sino también promover comportamientos que favorezcan la convivencia y la armonía en las relaciones sociales tanto en el espacio público como privado.

Implementación efectiva: Las políticas públicas deben ser implementadas de manera efectiva. Para lograrlo, se recomienda:

- Contratar personal o nombrar funcionarios específicos que utilizarán datos y evidencia para evaluar y diseñar nuevas políticas.
- Crear espacios donde los tomadores de decisiones alienten y premien el uso de la evidencia.

Alertas tempranas y prevención: El gobierno del Tolima debería implementar una política pública integral en materia de derechos humanos y alerta temprana para minimizar las violaciones de derechos humanos en este departamento. Esto requiere actuar de forma proactiva y rápida en situaciones de riesgo. Minimizar las violaciones de derechos humanos es fundamental para garantizar la seguridad, la justicia y el bienestar de las personas. Es un compromiso ético y legal que las instituciones y gobiernos deben asumir y cumplir de manera prioritaria.

Análisis histórico y reciente del conflicto armado: Es importante comprender la dinámica histórica y reciente del conflicto armado en el Tolima y sus consecuencias humanitarias. Este análisis puede proporcionar información valiosa para el desarrollo de políticas de seguridad humana. Este análisis contextual e histórico es fundamental para diseñar e implementar políticas públicas efectivas de seguridad humana, que aborden de manera integral las diferentes dimensiones del conflicto y sus impactos en la población.

Aquí algunas recomendaciones de políticas públicas clave en materia de seguridad humana ver tabla 3:

Tabla 3.

Aspectos de políticas públicas

Aspectos a tener en cuenta para las políticas públicas en materia de seguridad	Recomendación
Fortalecimiento del Estado de Derecho	<p>Reformar y fortalecer los sistemas judiciales y de aplicación de la ley.</p> <p>Combatir la corrupción y la impunidad de manera efectiva.</p> <p>Garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.</p> <p>Garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.</p>
Protección y promoción de los Derechos Humanos	<p>Armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales de derechos humanos.</p> <p>Implementar mecanismos efectivos de rendición de cuentas y supervisión.</p> <p>Educar y capacitar a funcionarios públicos en derechos humanos.</p> <p>Desarrollar e implementar estrategias de prevención de conflictos.</p>

Prevención de Conflictos y Resolución
Pacífica de Disputas

Promover el diálogo, la mediación y la negociación como herramientas de resolución de conflictos.

Fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de la resolución de conflictos.

Implementar políticas integrales de prevención del crimen y la violencia.

Seguridad Ciudadana y Prevención de la
Violencia

Reformar y modernizar los sistemas de seguridad pública y justicia penal.

Promover la participación comunitaria en la seguridad ciudadana.

Promover la participación comunitaria en la seguridad ciudadana.

Desarrollo Sostenible e Inclusión Social

Diseñar e implementar políticas de desarrollo económico y social inclusivas.

Garantizar el acceso universal a servicios básicos como salud, educación y vivienda.

Promover la igualdad de oportunidades y la reducción de las desigualdades.

Nota: Fuente. Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Ministerio del Interior. 2024.

Estas son algunas recomendaciones clave que pueden ser consideradas al momento de formular políticas públicas en materia de seguridad humana. Es importante adaptarlas al contexto y necesidades específicas de cada municipio del departamento del Tolima.

Conclusiones

Así que, la metodología utilizada para evaluar los esfuerzos de seguridad ciudadana se basa en un enfoque híbrido. Para recopilar información sobre la delincuencia se utilizan sistemas de información estadística, criminal, criminalística y de actividad policial. Además, también se

revisaron las actas de las reuniones del consejo de seguridad, del comité de orden público y de los consejos de industria.

Como resultado se puede concluir que la seguridad pública abarca varios aspectos, desde las funciones de protección tradicionales hasta consideraciones más amplias sobre el bienestar social. Tradicionalmente, se ha considerado que la seguridad pública protege a las personas de cualquier daño, ya sea por la violencia o por elementos naturales. Sin embargo, va más allá de la mera protección e incluye el acceso a elementos esenciales como alimentos, vivienda, atención médica, educación y oportunidades de empleo. La seguridad pública es un bien que no puede excluirse ni competir, lo que significa que todas las personas se benefician de ella independientemente de sus contribuciones. Los sistemas innovadores, como los robots de protección de la seguridad pública y los sistemas de monitoreo, mejoran las medidas de seguridad al recopilar datos, analizar los riesgos y proporcionar alertas tempranas para estrategias de respuesta efectivas. Reconocer la naturaleza multifacética de la seguridad pública es crucial para que los responsables políticos asignen los recursos de manera efectiva y garanticen una protección integral para todos los miembros de la sociedad.

De manera que, los funcionarios encargados de liderar y ejecutar estas acciones enfrentan desafíos institucionales. Suministrar servicios que resguarden la seguridad pública y fortalecer la confianza entre los responsables y las personas que desean una vida tranquila son aspectos clave. Esto implica superar barreras y garantizar una gestión efectiva de los recursos disponibles.

De modo que, es fundamental incorporar la línea de seguridad y convivencia ciudadana en el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la entidad territorial. Esto permitirá costear los programas y proyectos definidos en la planeación estratégica y ajustar y redimensionar las acciones de seguridad.

En resumen, el análisis de las acciones en seguridad ciudadana debe considerar tanto los aspectos cuantitativos (estadísticas de delitos) como los cualitativos (retos institucionales y planificación estratégica). La Gobernación del Tolima puede utilizar estos hallazgos para mejorar y fortalecer sus políticas y acciones en beneficio de la comunidad.

Bibliografía

- Aleksandr, I. S. (2019). *Cuestiones teóricas del concepto de "seguridad"*. Obtenido de Revista de lenguajes de programación, 12(3):34-. doi: 10.5539/JPL.V12N3P34:
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/5d3710f8d7eb6.pdf
- Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. (2010).
- Delgado, J. J. (2023). *Políticas públicas de seguridad en España. análisis desde perspectivas criminológicas*. Obtenido de Revista Opinión Jurídica.
- Díaz, G. N. (2023). *Nota Regional _ Consolidar una estrategia regional de seguridad y convivencia para el Tolima(2023 - 2027)*.
- Elsa, P. P. (2023). *Amenazas al concepto de justicia social*. Obtenido de doi:
10.31219/osf.io/b9vj4.
- Fernández, O. A. (2019). *La implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP: un estudio comparado desde la experiencia*. Obtenido de Universidad Nacional de Colombia, Bogotá: <http://www.scielo.org.co/pdf/anpol/v32n95/0121-4705-anpol-32-95-104.pdf>
- Fontana, L. B. (2005). *La justicia como virtud social*. Obtenido de
<https://www.corteidh.or.cr/tablas/r28711.pdf>
- Llauró, M. d. (2022). *Viejos y nuevos paradigmas de la seguridad humana. Controversias y nuevos desafíos en el siglo XXI*. Obtenido de Anuario Latinoamericano, 12:13-28. doi:
10.17951/al.2021.12.13-28: file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/13947-56913-1-SM.pdf
- MOE. (2023). *Misión de Observación Electoral*. Obtenido de Informe de violencia contra líderes políticos,: <https://moe.org.co/wp-content/uploads/2018/07/Informe-de-violencia-contra-1%C3%ADderes-pol%C3%ADticos-sociales-y-comunales-4Abril-1.pdf>
- Montaña, L. L. (2023). *Paz Territorial y Capacidades Institucionales: Un balance de la implementación del Acuerdo de Paz con énfasis en la gestión de recursos en el municipio de Planadas, Tolima (2018-2022)*. Obtenido de trabajo de grado - Monografía - Pregrado:
<https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/65275?locale-attribute=pt>

- Morazán, M. T. (2022). *Seguridad humana*. Obtenido de 27-40. doi: 10.4324/9781003221081-2: file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/10.4324_9781003221081-2_chapterpdf.pdf
- Murillo Torrecilla, F. J., & Hernández Castilla, R. (2011). *Hacia un Concepto de Justicia Social*. Obtenido de Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, vol. 9, núm. 4, 2011,: <https://www.redalyc.org/pdf/551/55122156002.pdf>
- Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2010).
- Ortiz, F. V. (2021). *Seguridad pública y participación ciudadana en el Estado de México*.
- Pereira, J. P. (2005). *Seguridad Humana _ Tesis doctoral* . Obtenido de Universidad Autonoma de Barcelona : <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r27406.pdf>
- Plan de desarrollo departamental el Tolima nos une. (2020-2023).
- Plan de Desarrollo el Tolima Nos Une. (2020-2023). *Proyecto de Ordenanza Plan de Desarrollo Departamental* . Obtenido de <https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/Ordenanza-Plan-de-desarrollo-version-8.pdf>
- Ritu, G. (2022). *Introduction*. . Obtenido de 1-23. doi: 10.4337/9781800376977.00005: file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/9781800376977-book-part-9781800376977-5.pdf
- Touriñán, J. M. (2006). *Valores y convivencia ciudadana: una responsabilidad de formación compartida y derivada*.